

1.<sup>a</sup> SESION DE PRORROGA — OCTUBRE 2 DE 1888

Presidencia del doctor PELLEGRINI

**Ministro presente:** de justicia, culto e instrucción pública.

**Senadores presentes:** Baltoré, Barros, Cambaceres, Dávila, de la Silva, del Valle, Derqui, Funes, Gil, Gollán, Moyano, Navarro, Nougús, Oliva, Ortega, Paz, Rodríguez (C. J.), Ruiz (H.), Ruiz (M.) y Zapata.

**Senadores ausentes, con licencia:** Ortiz, Rocha, Rodríguez (M. F.), y Tello.

**Senadores ausentes, con aviso:** Baibiene, Febre, Mendoza y Pérez.

SUMARIO

- 1.—Asuntos entrados.
- 2.—Se acuerda licencia al señor senador Pizarro.
- 3.—Se considera y aprueba el despacho de la Comisión Especial, en el proyecto de ley sobre matrimonio civil.

—En Buenos Aires, a dos de Octubre de mil ochocientos ochenta y ocho, reunidos en su sala de sesiones el señor presidente y los señores senadores arriba inscriptos, se abrió la sesión con inasistencia de los señores senadores Baibiene, Febre, Mendoza y Pérez; y los señores senadores Ortiz, Rocha, Rodríguez (M. F.) y Tello, con licencia.

Leída y aprobada el acta de la anterior de 27 de Septiembre (52<sup>a</sup> ordinaria), se da cuenta de los asuntos entrados:

1

Comunicaciones oficiales

Mensaje del Poder Ejecutivo, prorrogando las sesiones del Congreso para la consideración de varios asuntos.

El ministro de justicia, culto e instrucción pública remite la memoria correspondiente al año pasado. Al archivo.

El Poder Ejecutivo acusa recibo de los siguientes proyectos de ley:

—Acordando pensión a las señoras Carmen O. de Alvarez y Margarita Rebollo: mandando abonar 4.000 pesos a la señora Casiana Uriarte de García; y acordando aumento de pensión a las señoras Sara P. de Sáenz y Delfina y Angélica Vega. Al archivo.

2

El señor senador Pizarro pide licencia para faltar por quince días a las sesiones de la Cámara. Concédese sobre tablas.

La Honorable Cámara de Diputados devuelve sin aceptar las modificaciones introducidas al proyecto de pensión de la señora María M. de Alzogaray. A la Comisión correspondiente.

La misma, remite en revisión un proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo para vender tierras fiscales a varios jefes del Ejército. A la Comisión del Interior.

La misma, comunica haber sancionado definitivamente los proyectos de ley siguientes: concediendo el establecimiento de líneas de tranvías en los terrenos del puerto; autorizando al Poder Ejecutivo para vender tierras fiscales a varios jefes del ejército; sobre mejora y ensanche del camino carretero de San Juan a las poblaciones de Coquimbo, Huaseo y Copiapó; acordando licencia al presidente de la República para ausentarse por sesenta días de la Capital; jubilando al señor Villafañe, rector

del Colegio Nacional de Jujuy; autorizando al Poder Ejecutivo para contribuir con la cantidad de doscientos mil pesos para la celebración de la Segunda Exposición Internacional de Ganadería y Agricultura, que tendrá lugar en 1890 en la Capital; acordando pensión a la viuda del ex secretario de la Cámara de Diputados y subvención a los señores Luis A. Bellocq y Santiago Ortiz, para perfeccionar sus estudios en Europa. Al archivo.

—Eduardo A. Sopkinz pide se le devuelva el expediente que presentó al Honorable Senado.

**Sr. Presidente.** — Si ningún señor senador se opone, se hará la devolución que se solicita.

—Así queda acordado.

3

**Sr. Presidente.** — Habiéndose expedido la Comisión Especial en el proyecto sobre matrimonio civil, está en discusión en particular.

*Honorable Senado:*

La Comisión Especial, a cuyo estudio fueron sometidas las reformas propuestas al proyecto de ley de matrimonio civil, os aconseja su aceptación, con las modificaciones que se detallan en seguida y que se indicarán oportunamente por el miembro informante.

Sala de comisiones, Septiembre 28 de 1888.

*M. Derqui. — C. J. Rodríguez. —  
A. del Valle. — José V. Zapata.  
— José R. Baltori*

En disidencia: *Pedro L. Funes.*

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º — Queda modificado el Código Civil, en la forma y con arreglo a lo que establece en los artículos siguientes.

**Sr. del Valle.** — Me parece que pueden darse por aprobados los artículos que no se observen.

**Sr. Presidente.** — Si no hay observación en contrario, así se procederá.

—Está en discusión el artículo 2º.

**Sr. Funes.** — Pido la palabra.

Como miembro de la Comisión de Legislación, he formado parte de la Comisión Especial;

también he tenido participación en algunos artículos que se han redactado; pero, como anteriormente he expresado mis opiniones en contra del proyecto en general, votaré en favor de aquellos artículos que estén con mis ideas, y en contra de los que crea inconvenientes.

Creo que en este sentido procederán los señores senadores que me acompañaron en la discusión en general.

**Sr. Presidente.** — ¿Pero, el señor senador no observa la moción del señor senador por Buenos Aires?

**Sr. Funes.** — No, señor.

—Queda sancionado el artículo 1º.

—Se aprueban sin observación los artículos siguientes:

## SEGUNDA SECCIÓN

### *De los derechos personales en las relaciones de familia*

#### TITULO PRIMERO

##### Del matrimonio

##### CAPÍTULO I

##### *Régimen del matrimonio*

Artículo 2º — La validez del matrimonio, no habiendo ninguno de los impedimentos establecidos en los incisos 1º, 2º, 3º y 6º del artículo 9º, será juzgada en la República por la ley del lugar en que se haya celebrado, aunque los contrayentes hubiesen dejado su domicilio, para no sujetarse a las formas y leyes que en él rigen.

Art. 3º — Los derechos y las obligaciones personales de los cónyuges son regidos por las leyes de la República, mientras permanezcan en ella, cualquiera sea el país en que hubieran contraído el matrimonio.

Art. 4º — El contrato nupcial rige los bienes del matrimonio, cualesquiera sean las leyes del país en que el matrimonio se celebró.

Art. 5º — No habiendo convenciones nupciales, ni cambio del domicilio matrimonial, la ley del lugar donde el matrimonio se celebró rige los bienes muebles de los esposos, donde quiera que se encuentren o donde quiera que hayan sido adquiridos.

Si hubiese cambio de domicilio, los bienes adquiridos por los esposos, antes de mudarlo, son regidos por las leyes del primero. Los que hu-

biesen adquirido después del cambio son regidos por las leyes del nuevo domicilio.

Art. 6º — Los bienes raíces son regidos por la ley del lugar en que estén situados.

Art. 7º — La disolución en país extranjero de un matrimonio celebrado en la República Argentina, aunque sea de conformidad a las leyes de aquél, si no lo fuere a las de este código, no habilita a ninguno de los cónyuges para casarse.

## CAPÍTULO II

### *De los esponsales*

Art. 8º — La ley no reconoce esponsales de futuro. Ningún tribunal admitirá demanda sobre la materia, ni por indemnización de perjuicios que ellos hubiesen causado.

## CAPÍTULO III

### *De los impedimentos*

Art. 9º — Son impedimentos para el matrimonio:

- 1º La consanguinidad entre ascendientes y descendientes sin limitación, sean legítimos o ilegítimos;
- 2º La consanguinidad entre hermanos o medio hermanos, legítimos o ilegítimos;
- 3º La afinidad en línea recta en todos los grados;
- 4º No tener la mujer doce años cumplidos y el hombre catorce;
- 5º El matrimonio anterior mientras subsista;
- 6º Haber sido autor voluntario o cómplice de homicidio de uno de los cónyuges;
- 7º La locura;

En los casos de los incisos 1º y 2º, la prueba del parentesco legítimo queda sujeta a lo prescripto en las disposiciones del título 5º, libro 1, sección 2ª, del Código Civil.

Art. 10. — La mujer mayor de doce años y el hombre mayor de catorce, pero menores de edad, y los sordomudos que no saben darse a entender por escrito, no pueden casarse entre sí, ni con otra persona, sin el consentimiento de su padre legítimo o natural que lo hubiere reconocido, o sin el de tutor o curador a falta de ambos, o en defecto de éstos sin el del juez.

Art. 11. — El juez de lo civil decidirá de las causas de disenso en juicio privado y meramente informativo.

Art. 12. — El tutor y sus descendientes legítimos que estén bajo su potestad no podrán contraer matrimonio con el menor o la menor que ha tenido o tuviese aquél bajo su guarda, hasta que fenecida la tutela, haya sido aprobada la cuenta de su administración. Si lo hicieran, el tutor perderá la asignación que le habría correspondido sobre las rentas del menor, sin perjuicio de su responsabilidad penal.

Art. 13. — Casándose los menores sin la autorización necesaria, les será negada la posesión y administración de sus bienes hasta que sean mayores de edad; no habrá medio alguno de cubrir la falta de autorización.

## CAPÍTULO IV

### *Del consentimiento*

Art. 14. — Es indispensable para la existencia del matrimonio el consentimiento de los contrayentes, expresado ante el oficial público encargado del Registro Civil.

El acto que careciere de alguno de estos requisitos no producirá efectos civiles, aun cuando las partes tuviesen buena fe.

Art. 15. — El consentimiento puede expresarse por medio de apoderado, con poder especial, en que se designe expresamente la persona con quien el poderdante ha de contraer matrimonio.

Art. 16. — La violencia, el dolo y el error sobre la identidad del individuo físico o de la persona civil, vician el consentimiento.

## CAPÍTULO V

### *De las diligencias previas a la celebración del matrimonio*

Art. 17. — Los que pretendan contraer matrimonio, se presentarán ante el oficial público encargado del Registro Civil, en el domicilio de cualquiera de los futuros esposos, y manifestarán verbalmente su intención, que será consignada en una acta firmada por el oficial público, por los futuros esposos y por dos testigos; si los futuros esposos no supieren o no pudieren firmar, firmará a su ruego otra persona.

Art. 18. — En el acta debe expresarse:

- 1º Los nombres y apellidos de los que quieran casarse;
- 2º Su edad;
- 3º Su nacionalidad, su domicilio y el lugar de su nacimiento;
- 4º Su profesión;

- 5º Los nombres y apellidos de sus padres, su nacionalidad, profesión y domicilio;
- 6º Si antes han sido o no casados, y en caso afirmativo, el nombre y apellido de su anterior cónyuge, el lugar del casamiento y la causa de su disolución.

Art. 19. — Los futuros esposos deberán presentar en el mismo acto:

- 1º Las partidas de su nacimiento;
- 2º Las de defunción de sus cónyuges, en caso de haber sido anteriormente casados;
- 3º Copia, debidamente legalizada, de la sentencia ejecutoriada que hubiese declarado nulo el matrimonio anterior de uno de ambos futuros esposos en su caso;
- 4º La declaración auténtica de las personas cuyo consentimiento exigido por la ley, si no lo prestaran verbalmente en ese acto, o la venia supletoria del juez cuando preceda. Los padres, tutores o curadores, que prestan su consentimiento ante el oficial público, firmarán el acta a que se refiere el artículo 17; si no supieren o no pudieren firmar, lo hará alguno de los testigos a su ruego.

Los futuros esposos cuyo domicilio de origen no sea en la República, deberán presentar además certificado de su estado civil en aquel domicilio;

- 5º Dos testigos que, por el conocimiento que tengan las partes, declaren que los creen hábiles para contraer matrimonio.

Art. 20. — Si las partidas mencionadas en el artículo anterior, se encontraran en el registro del oficial público que interviene en el acto, bastará referirse a ellas.

Art. 21. — En caso de no existir las partidas, o cuando la inscripción en los registros se hubiese hecho bajo falsos nombres o como de padres no conocidos, esos hechos podrán probarse por los otros medios de prueba, admitidos en este código.

Art. 22. — Formalizada el acta a que se refiere el artículo 16, el oficial público la publicará en la puerta exterior de su oficina durante ocho días. Si los futuros esposos tuvieron distintos domicilios el oficial público ante el cual se seguirán los procedimientos remitirá copia al del otro domicilio, para que haga idéntica publicación. Si los futuros esposos o uno de ellos hubiera cambiado de domicilio en los últimos seis me-

ses anteriores a la publicación, esta se hará además en el domicilio anterior.

Art. 23. — El oficial público que reciba para publicar actas remitidas por los de otros lugares, deberá, pasado el término de la publicación, levantar un acta, en que hará constar que aquélla se verificó. De esta acta y de la que levantará sobre oposición, si la hubiere, remitirá testimonio al oficial público, ante quien deba celebrarse el matrimonio; si no hubiese habido oposición, se expresará así en el acta.

Art. 24. — El matrimonio no podrá celebrarse sino después de los tres días siguientes al último de la publicación. Si por razón del domicilio de los contrayentes la publicación se hubiere hecho en varios lugares, el oficial público no podrá proceder a la celebración del matrimonio sin haber recibido los testimonios a que se refiere el artículo anterior.

—En discusión.

Artículo 25. — Se considerará como no hecha la publicación si el matrimonio no se celebra dentro de los seis meses siguientes.

**Sr. Derqui.** — Antes de pasar a otro capítulo debo observar que en el 17, que es el primero de los que acaban de sancionarse, hay un pequeño error que probablemente se ha producido al copiar el proyecto.

Donde dice que los que pretendan contraer matrimonio se presentarán ante el oficial público encargado del Registro Civil, en el domicilio de cualquiera de los futuros esposos, debe decir: «en el domicilio de cualquiera de ellos», porque son éstos los futuros esposos, precisamente, los que se presentan.

**Sr. Presidente.** — Queda salvado el error.

## CAPÍTULO VI

### *De la oposición*

Artículo 26. — Sólo pueden alegarse como motivos de oposición los impedimentos establecidos en este código.

La oposición que no se funde en la existencia de alguno de esos impedimentos, será rechazada sin más trámite.

—En discusión el:

Artículo 27. — El derecho de hacer oposición a la celebración del matrimonio por razón de los impedimentos establecidos en el artículo 9º compete:

- 1º Al cónyuge de la persona que quiere contraer otro;
- 2º A los parientes de cualquiera de los futuros esposos dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad;
- 3º A los tutores o curadores;
- 4º El ministerio público deberá deducir oposición, siempre que tenga conocimiento de esos impedimentos.

**Sr. del Valle.** — Al ministerio público, que deberá deducir oposición.

—Se aprueba en esa forma.

**Artículo 28.** — Si la mujer viuda quiere contraer matrimonio contrariando lo dispuesto en el artículo 99, los parientes del marido en grado sucesible, tendrán derecho a deducir oposición.

**Art. 29.** — Los padres, los tutores y curadores, podrán, además, deducir oposición por falta de su conocimiento.

—En discusión el:

**Artículo 30.** — Los padres, tutores y curadores deben expresar los motivos de la oposición; pero, los padres estarán exentos de esa obligación cuando se trate de un hijo varón menor de 18 años o de una hija mujer de 15 años, excepto el caso en que estén disfrutando del usufructo de sus bienes. La oposición sólo puede fundarse:

- 1º En la existencia de alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 9º;
- 2º En enfermedad contagiosa de la persona que pretenda casarse con el menor;
- 3º En su conducta desarreglada e inmoral;
- 4º En que haya sido condenado por delito de robo, hurto o estafa, o cualquiera otro que tenga pena mayor de un año de prisión;
- 5º Falta de medios de subsistencia y de actitud para adquirirlos.

**Sr. Funes.** — Debe decir «varón».

**Sr. del Valle.** — Basta quitar las palabras «o de una» y «mujer».

**Sr. Zapata.** — Se debe substituir la palabra «disfrutando» por «gozando».

—Se aprueba en esa forma.

**Artículo 31.** — La oposición puede deducirse ante cualquiera de los oficiales públicos que haya publicado el acta a que se refiere el artículo 14.

**Art. 32.** — La oposición puede deducirse desde que se hayan iniciado las diligencias para el matrimonio hasta que éste se celebre.

**Art. 33.** — La oposición «se hará verbalmente o por escrito, expresando»:

- 1º El nombre y apellido, edad, estado, profesión y domicilio del oponente;
- 2º El parentesco que lo ligue con alguno de los futuros esposos;
- 3º El impedimento en que funda su oposición;
- 4º Los motivos que tenga para creer que existe el impedimento;
- 5º Si tiene o no documentos que prueben la existencia del impedimento y sus referencias;
- 6º Cuando la oposición se deduzca verbalmente, el oficial público levantará acta circunstanciada que deberá firmar con el oponente y con dos testigos, si este no supiere o no pudiere firmar. Cuando la oposición se deduzca por escrito, se transcribirá en el libro de actas con las mismas formalidades.

**Sr. del Valle.** — Se debe suprimir el número 6º del último inciso, porque no es un inciso sino una disposición general.

—Así queda acordado.

**Artículo 34.** — Si «el oponente» tuviere documentos, debe presentarlos en el mismo acto. Si no los tuviere, expresará el lugar donde existen y los detallará, si tuviere noticia de ellos.

**Art. 35.** — Deducida en forma la oposición, se dará conocimiento de ella a los futuros esposos «por el oficial público que deba celebrar el matrimonio».

Si alguno de ellos o ambos estuviesen conformes en la existencia del impedimento legal, «el oficial público lo hará constar en el acta y no celebrará el matrimonio».

**Art. 36.** — Si la oposición se dedujese ante un oficial público que no fuera el del lugar en donde haya de celebrarse el matrimonio, aquél deberá remitir a éste dentro de veinticuatro horas, copia del acta de oposición en los documentos presentados, dejando constancia.

**Art. 37.** — Si la oposición no se fundase en alguno de los impedimentos legales, el oficial público ante quien se deduzca, la rechazará de oficio levantando acta.

**Art. 38.** — Si los futuros esposos no reconocieran la existencia del impedimento, deberán

expresarlo ante el oficial público dentro de los tres días siguientes al de la notificación, éste levantará acta y remitirá al juez letrado de lo civil copia autorizada de todo lo actuado, con los documentos presentados, suspendiendo la celebración del matrimonio.

Art. 39. — Los tribunales civiles substanciarán y decidirán en juicio sumario con citación fiscal la oposición deducida, y remitirán copia legalizada de la sentencia al oficio público.

Art. 40. — El oficial público no procederá a la celebración del matrimonio mientras que la sentencia que desestime la oposición no haya pasado en autoridad de cosa juzgada.

Si la sentencia declarase la existencia del impedimento en que se funda la oposición, no podrá celebrarse el matrimonio; tanto en uno, como en otro caso, el oficial público anotará al margen del acta de oposición la parte dispositiva de la sentencia.

Art. 41. — Si la oposición fuera rechazada, su autor, no siendo un ascendiente, o el ministerio público, pagará a los futuros esposos una indemnización prudencialmente fijada por los tribunales que conozcan de ella.

Art. 42. — Cualquier persona puede denunciar la existencia de alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 9º.

Art. 43. — Hecha en esta forma la denuncia, el oficial público la remitirá al juez letrado de lo civil, quien dará vista de ella al ministerio fiscal; éste, dentro de tres días, deducirá oposición o manifestará que considera infundada la denuncia.

## CAPÍTULO VII

### *De la celebración del matrimonio*

Art. 44. — El matrimonio debe celebrarse ante el oficial público encargado del Registro Civil, en su oficina, públicamente, compareciendo personalmente los futuros esposos o sus apoderados en el caso previsto por el artículo 14, en presencia de los testigos y con las formalidades que esta ley prescribe.

Si alguno de los futuros cónyuges estuviere imposibilitado para concurrir a la oficina, el matrimonio podrá celebrarse en su domicilio.

**Sr. del Valle.** — Debe ser artículo 15 en lugar de 14. Está cambiada la numeración.

**Sr. Presidente.** — Se hará la corrección.

**Sr. Navarro.** — Pido la palabra.

He hablado con el señor ministro respecto de este proyecto, y, si no recuerdo mal, creo que su propósito era sostener los artículos del

proyecto del Poder Ejecutivo; mas su silencio me prueba que ya no sostiene aquel proyecto.

Yo voté en contra del proyecto en general y, no obstante, tanto yo como algunos de mis colegas, estábamos dispuestos a aceptar en particular los artículos del proyecto del Poder Ejecutivo que creyéramos convenientes.

Como veo que el señor ministro no sostiene el proyecto presentado por él, pido que en los artículos que siguen se consigne mi voto en contra.

**Sr. Presidente.** — Así se hará.

**Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.** — Pido la palabra.

No creo haber dicho nada al señor senador por Catamarca que pudiera hacer creer que yo sostendría el artículo 44 del proyecto presentado al principio.

Este artículo tiene relación con otros que están más adelante, y está de acuerdo con las ideas del Poder Ejecutivo.

Aun cuando se rechazara este artículo, quedaría en la ley cuál había sido el espíritu del proyecto del Poder Ejecutivo.

Lo que ha querido el Poder Ejecutivo es que no se haga violencia a ningún habitante de la República, para que el matrimonio se celebre primero ante el sacerdote de las creencias que cada uno profese, y después ante el oficial público del Registro Civil, o viceversa.

Esta forma no difiere, a mi entender, de la que propuso el Poder Ejecutivo, sino en la redacción, puesto que el proyecto del Poder Ejecutivo decía: «Si se celebrase el matrimonio ante un sacerdote de la religión de los contrayentes, este matrimonio no tendrá efecto ninguno si no se inscribe en el Registro Civil correspondiente.» Es decir que, en realidad, el matrimonio, según lo entiende el Poder Ejecutivo, venía a celebrarse ante el oficial del Registro Civil.

Creo, pues, como decía, que el espíritu del proyecto del Poder Ejecutivo quedará completamente subsistente aun cuando se rechazara el artículo, cuya numeración no recuerdo en este momento, pero que establece como obligatoria la necesidad de celebrar primero el matrimonio civil, que es lo que he dicho siempre.

Es por esto y por no prolongar esta discusión, que tiene ya fatigado al Senado, que he creído guardar silencio sin que haya, en mi entender, la menor contradicción entre el proyecto del gobierno y el que la Comisión ha despachado.

Por otra parte, habiéndose discutido largamente en la Comisión este punto, creo que no

debemos hablar más sobre él y que lo que corresponde es votar.

**Sr. Derqui.** — Pido la palabra.

El señor senador por Catamarca se limita a hacer constar su voto en contra sin objetar el artículo que está en discusión; pero, después de la exposición del señor ministro, con la que estoy de perfecto acuerdo, porque el proyecto, tal cual lo está considerando el Senado, ha sido aceptado por él, tengo necesidad de decir que el artículo a que el señor ministro se refirió y al que parece no prestarle su aceptación, no va a modificar en nada la tendencia que se ha tenido en vista al principio. La diferencia substancial que hay entre estos dos artículos es que uno dispone que primero debe celebrarse civilmente el matrimonio, y el otro establece que debe celebrarse primero por la Iglesia.

Es todo lo que hay.

—Se vota y se aprueba el artículo 44, lo mismo que sin observación, los siguientes:

**Artículo 45.** — Si el matrimonio se celebra en la oficina deberán concurrir dos testigos, y cuatro si se celebra en el domicilio de alguno de los cónyuges.

**Art. 46.** — En el acto de la celebración del matrimonio el oficial público dará lectura a los futuros esposos de los artículos 55, 56 y 58 de esta ley; recibirá de cada uno de ellos personalmente, uno después del otro, la declaración de que quieren respectivamente tomarse por marido y mujer, y pronunciará en nombre de la ley que quedan unidos en matrimonio.

El oficial público no podrá oponerse a que los esposos, después de prestar su consentimiento ante él, hagan bendecir su unión en el mismo acto por un ministro de su culto.

**Art. 47.** — En el acta de celebración del matrimonio se hará constar,:

- 1º La fecha en que el acto tiene lugar;
- 2º El nombre y apellido, edad, profesión, domicilio y lugar del nacimiento de los comparecientes;
- 3º El nombre y apellido, profesión, domicilio y nacionalidad de sus respectivos padres, si fueren conocidos;
- 4º El nombre y apellido del cónyuge premuerto, cuando alguno de los cónyuges ha sido ya casado;
- 5º Consentimiento de los padres, tutores o curadores; el supletorio del juez en los casos en que es requerido;

6º La publicación del matrimonio y su fecha;

7º La mención de si hubo o no oposición y de su rechazo;

8º La declaración de los contrayentes de que se toman por esposos, y la hecha por el oficial público de que quedan unidos en nombre de la ley;

9º El reconocimiento que los contrayentes hagan de los hijos naturales, si los tuvieran, que legitimen por su matrimonio;

10. El nombre, apellido, edad, estado, profesión y domicilio de los testigos;

11. La mención del poder, con determinación de la fecha, lugar y escribano u oficial público ante quien se hubiere otorgado, en caso que el matrimonio se celebre por medio de apoderado, cuyo instrumento habilitante se archivará en la oficina.

**Art. 48.** — El acta de matrimonio será redactada y firmada inmediatamente por todos los que intervienen en él o por otros, a ruego de los que no pudieren o no supieren hacerlo.

**Art. 49.** — La declaración de los contrayentes de que se toman respectivamente por esposos, no puede someterse a término ni a condición alguna.

**Art. 50.** — El jefe de la oficina del Registro Civil entregará a los esposos copia legalizada del acta de «matrimonio».

**Art. 51.** — El oficial público no podrá rehusar la celebración del matrimonio sino en virtud de las causas establecidas en esta ley, y no deberá celebrarlo cuando de los documentos presentados resulte algún impedimento. En caso de negativa hará constar en un acta los motivos en que la funde y entregará testimonio de ella a los interesados, quienes podrán ocurrir al juez letrado de lo civil si la consideran infundada.

**Art. 52.** — El oficial público procederá a la celebración del matrimonio, con prescindencia de todas o de algunas de las formalidades que deben precederle, cuando se justificase con el certificado de un médico, y donde éste no existiere, con el testimonio de dos vecinos, que alguno de los futuros esposos se encuentra en peligro de muerte, haciéndolo constar en el acta. Cuando hubiere peligro en la demora, el matrimonio en artículo de muerte podrá celebrarse ante cualquier funcionario judicial, el cual deberá levantar acta de la celebración, haciendo constar las circunstancias mencionadas en los incisos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 8º, 9º, 18, 11 del artículo

47 y la remitirá al oficial público encargado del Registro Civil, para que lo protocolice.

Art. 53. — En los casos del artículo anterior, el acta de la celebración del matrimonio será publicada durante ocho días en la forma establecida en el artículo 22.

Art. 54. — Todos los actos a que se refiere esta ley serán extendidos en libros encuadernados y foliados, sin perjuicio de otras formalidades que establezcan las leyes del Registro Civil.

## CAPÍTULO VIII

### *Derechos y obligaciones de los cónyuges*

Art. 55. — Los esposos están obligados a guardarse fidelidad, sin que la infidelidad de uno autorice al otro a proceder del mismo modo. El que faltare a esta obligación puede ser demandado por el otro por acción de divorcio, sin perjuicio de la que le acuerde el Código Penal.

Art. 56. — El marido está obligado a vivir en una misma casa con su mujer, a prestarle todos los recursos que le fueren necesarios y a ejercer todos los actos y acciones que a ella correspondan, haciendo los gastos judiciales necesarios, aun en el caso de que fuese acusada criminalmente. Faltando el marido a estas obligaciones, la mujer tiene derecho a pedir judicialmente que aquél le dé los alimentos necesarios y las expensas que le fuesen indispensables en los juicios.

Art. 57. — Si no hubiere contrato nupcial, el marido es el administrador legítimo de todos los bienes del matrimonio, incluso los de la mujer, tanto de los que llevó al matrimonio como los que adquiriese después por títulos propios.

Art. 58. — La mujer está obligada a habitar con su marido donde quiera que éste fije su residencia. Si faltase a esa obligación, el marido puede pedir las medidas judiciales necesarias y tendrá derecho a negarle alimentos. Los tribunales, con conocimiento de causa, pueden eximir a la mujer de esta obligación cuando de su ejecución resulte peligro para su vida.

Art. 59. — La mujer no puede estar en juicio, por sí ni por procurador, sin licencia especial del marido, dada por escrito, con excepción de los casos en que este código presume la autorización del marido o no la exige, o sólo exige una autorización general o sólo una autorización judicial.

Art. 60. — Tampoco puede la mujer, sin licencia o poder del marido, celebrar contrato alguno ni desistir de un contrato anterior, ni adquirir bienes o acciones por título oneroso o

lucrativo, ni anejenar ni obligar sus bienes, ni contraer obligación alguna, ni remitir obligación a su favor.

Art. 61. — Se presume que la mujer está autorizada por el marido si ejerce públicamente alguna profesión o industria, como directora de un colegio, maestra de escuela, actriz, etcétera, y en tales casos se entiende que está autorizada por el marido para todos los actos o contratos concernientes a su profesión o industria, si no hubiese reclamación por parte de él, anunciada al público o judicialmente intimada a quien con ella hubiese de contratar. Se presume también la autorización del marido en las compras al contado que la mujer hiciere y en las compras al fiado de objetos destinados al consumo ordinario de la familia.

Art. 62. — No es necesaria la autorización del marido en los pleitos entre él y su mujer, ni para defenderse cuando fuese criminalmente acusada, ni para hacer su testamento o revocar el que hubiese hecho, ni para administrar los bienes que se hubiese reservado por el contrato de matrimonio.

Art. 63. — La mujer, el marido y los herederos de ambos, son los únicos que pueden reclamar la nulidad de los actos y obligaciones de la mujer por falta de licencia del marido.

Art. 64. — Bastará que la mujer sea solamente autorizada por el juez del domicilio, cuando estuviese el marido loco o en lugar no conocido, en los casos del artículo 135 de este código, en cuanto a los actos que los menores casados no pueden ejecutar.

Art. 65. — Los tribunales con conocimiento de causa, pueden suplir la autorización del marido, cuando éste se hallare ausente o impedido para darla, «y en los casos especiales previstos por el Código Civil».

Art. 66. — El marido puede revocar a su arbitrio la autorización que hubiere concedido a su mujer; pero la revocación no tendrá efecto retroactivo en perjuicio de tercero.

Art. 67. — El marido puede ratificar general o especialmente los actos para los cuales no hubiere autorizado a su mujer. La ratificación puede ser tácita por hechos del marido que manifiesten inequívocamente su aquiescencia.

Art. 68. — Los actos y contratos de la mujer no autorizada por el marido o autorizada por juez contra la voluntad del marido, obligarán solamente sus bienes propios, si no se pidiese su rescisión en el primer caso; pero no obligarán el haber social ni los bienes del



marido, sino hasta la concurrencia del beneficio que la sociedad conyugal o el marido hubiesen reportado del acto.

## CAPÍTULO IX

### *Del divorcio*

Art. 69. — El divorcio que este código autoriza consiste únicamente en la separación personal de los esposos, sin que se disuelva el vínculo matrimonial.

Art. 70. — No puede renunciarse en las convenciones matrimoniales la facultad de pedir el divorcio al juez competente.

Art. 71. — No hay divorcio por mutuo consentimiento de los esposos. Ellos no serán tenidos por divorciados sin sentencia de juez competente.

Art. 72. — Las causas del divorcio son las siguientes:

- 1ª Adulterio de la mujer o del marido;
- 2ª Tentativa de uno de los conyuges contra la vida del otro, sea como autor principal o como cómplice;
- 3ª La provocación de uno de los conyuges al otro a cometer adulterio u otros delitos;
- 4ª La sevicia;
- 5ª Las injurias graves. Para la gravedad de la injuria, el juez deberá tomar en consideración la educación, posición social y demás circunstancias de hecho que puedan presentarse;
- 6ª Los malos tratamientos, aunque no sean graves, cuando sean tan frecuentes que hagan intolerable la vida conyugal;
- 7ª El abandono «voluntario y malicioso».

Art. 73. — Puesta la acción de divorcio, o antes de ella, en casos de urgencia, podrá el juez, a instancia de la parte, decretar la separación personal de los casados y el depósito de la mujer en casa honesta, dentro de los límites de su jurisdicción; determinar el cuidado de los hijos con arreglo a las disposiciones de este código, y los alimentos que han de prestarse a la mujer y a los hijos que no quedasen en poder del padre, como también las expensas necesarias a la mujer para el juicio de divorcio.

Art. 74. — Si alguno de los conyuges fuese menor de edad, no podrá estar en juicio, como demandante o demandado, sin la asistencia de un curador especial, que para este solo fin ele-

girá la parte, y en su defecto nombrará el juez.

Art. 75. — Toda clase de prueba será admitida en este juicio, con excepción de la confesión o juramento de los conyuges.

Art. 76. — Se extingue la acción de divorcio y cesan los efectos del divorcio ya declarado, cuando los conyuges se han reconciliado después de los hechos que autorizaban la acción o motivaron el divorcio. La ley presume la reconciliación cuando el marido cohabita con la mujer, después de haber dejado la habitación común. La reconciliación restituye todo al estado anterior a la demanda de divorcio.

## CAPÍTULO X

### *Efectos del divorcio*

Art. 77. — Separados por sentencia de divorcio, cada uno de los conyuges puede fijar su domicilio o residencia donde crea conveniente, aunque sea en el extranjero; pero si tuviese hijos a su cargo, no podrá transportarlos fuera del país sin licencia del juez del domicilio.

Art. 78. — Si la mujer fuese mayor de edad, podrá ejercer todos los actos de la vida civil.

Cualquiera de los conyuges que fuese menor de edad, quedará sujeto a las disposiciones de este código, relativas a los menores emancipados.

Art. 79. — Si durante el juicio de divorcio, la conducta del marido hiciese temer enajenaciones fraudulentas, o disipación de los bienes del matrimonio, la mujer podrá pedir al juez de la causa que se haga inventario de ellos y se pongan a cargo de otro administrador, o que el marido dé fianza del importe de los bienes. Dada la sentencia de divorcio, los conyuges pueden pedir la separación de los bienes del matrimonio, con arreglo a lo dispuesto en el título «De la sociedad conyugal».

Art. 80. — El conyuge inocente que no hubiese dado causa al divorcio, podrá revocar las donaciones o ventajas que por el contrato del matrimonio hubiere hecho o prometido al otro conyuge, sea que hubiesen de tener efecto en vida o después de su fallecimiento.

Art. 81. — Los hijos menores de cinco años quedarán a cargo de la madre. Los mayores de esta edad se entregarán al esposo que, a juicio del juez, sea el más a propósito para educarlos, sin que se pueda alegar por el marido o por la mujer preferente derecho a tenerlos.

Art. 82. — Si por acusación criminal de alguno de los esposos contra el otro, hubiese condenación y prisión, reclusión o destierro, ninguno de los hijos de cualquier edad que sea, podrá ir con el que deba cumplir alguna de estas penas, sin consentimiento del otro cónyuge.

Art. 83. — El padre y la madre quedarán sujetos a todos los cargos y obligaciones que tienen para con sus hijos, cualquiera que sea el que hubiere dado causa al divorcio.

Art. 84. — El marido que hubiere dado causa al divorcio debe «contribuir» a la subsistencia de la mujer, si ella no tuviera medios propios suficientes. El juez determinará la cantidad y forma, atendidas las circunstancias de ambos.

Art. 85. — Cualquiera de los esposos que hubiere dado causa al divorcio, tendrá derecho a que el otro, si tiene medios, le provea de lo preciso para su subsistencia, si le fuese de toda necesidad.

## CAPÍTULO XI

### *De la disolución del matrimonio*

Art. 86. — El matrimonio válido no se disuelve sino por la muerte de uno de los esposos.

Art. 87. — El matrimonio que puede disolverse según las leyes del país en que se hubiese celebrado, no se disolverá en la República sino de conformidad al artículo anterior.

Art. 88. — El fallecimiento presunto del cónyuge ausente o desaparecido, no habilita al otro esposo para contraer nuevo matrimonio.

Mientras no se pruebe el fallecimiento del cónyuge ausente o desaparecido, el matrimonio no se reputa disuelto.

## CAPÍTULO XII

### *De la nulidad del matrimonio*

Art. 89. — Es absolutamente nulo el matrimonio celebrado con alguno de los impedimentos establecidos en los incisos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º del artículo 9º, y su nulidad puede ser demandada por el cónyuge que ignoró la existencia del impedimento y por los que hubieran podido oponerse a la celebración del matrimonio.

Art. 90. — Es anulable el matrimonio:

- 1º Cuando fuese celebrado con el impedimento establecido en el inciso 4º del

artículo 9º. La nulidad puede ser demandada por el cónyuge incapaz y por los que en su representación habrían podido oponerse a la celebración del matrimonio;

- 2º Cuando fuese celebrado el matrimonio con el impedimento establecido en el inciso 7º del artículo 9º. La nulidad podrá ser demandada por los que hubieren podido oponerse al matrimonio.

El mismo incapaz podrá demandar la nulidad, cuando recobrase la razón, si no hubiese continuado la vida maridable, y el otro cónyuge si hubiese ignorado la incapacidad al tiempo de la celebración del matrimonio y no hubiere hecho vida maridable después de conocida la incapacidad;

- 3º Cuando el consentimiento adoleciera de algunos de los vicios a que se refiere el artículo 15. En este caso la nulidad únicamente podrá ser demandada por el cónyuge que ha sufrido el error, el dolo o la violencia. Esta acción se extingue para el marido si ha habido cohabitación durante tres días de conocido el error o el dolo o de suprimida la violencia y para la mujer durante treinta días después;

- 4º En el caso de impotencia absoluta y manifiesta de uno de los cónyuges, anterior a la celebración del matrimonio, la acción corresponde exclusivamente al otro cónyuge.

Art. 91. — La acción de nulidad de un matrimonio no puede intentarse sino en vida de los dos esposos; uno de los cónyuges puede, sin embargo, deducir en todo tiempo, la que le compete contra un segundo matrimonio contraído por su cónyuge; si se opusiere la nulidad del primero, se juzgará previamente esta oposición.

Art. 92. — El matrimonio celebrado por el cónyuge de un ausente con presunción de fallecimiento, no puede ser impugnado sino probando la existencia del ausente.

## CAPÍTULO XIII

### *Efectos de la nulidad del matrimonio*

Art. 93. — Si el matrimonio nulo hubiese sido contraído de buena fe por ambos cónyuges, producirá hasta el día en que se declare su nulidad, todos los efectos del matrimonio válido, no sólo con relación a las personas y bie-

nes de los cónyuges, sino también en relación a los hijos.

En tal caso la nulidad sólo tendrá los efectos siguientes:

- 1º En cuanto a los cónyuges, cesarán todos los derechos y obligaciones que produce el matrimonio, con la sola excepción de la obligación recíproca de prestarse alimentos en caso necesario;
- 2º En cuanto a los bienes, los mismos efectos del fallecimiento de uno de los cónyuges; pero, antes del fallecimiento de uno de ellos, el otro no tendrá derecho a las ventajas o beneficios que en el contrato de matrimonio se hubiesen hecho al que de ellos sobreviviese;
- 3º En cuanto a los hijos concebidos durante el matrimonio putativo, serán considerados como legítimos, con los derechos y obligaciones de los hijos de un matrimonio válido;
- 4º En cuanto a los hijos naturales concebidos antes del matrimonio putativo entre el padre y la madre, y nacidos después, quedarán legitimados en los mismos casos en que el subsiguiente matrimonio válido produce este efecto.

Art. 94. — Si hubo buena fe sólo de parte de uno de los cónyuges, el matrimonio hasta el día de la sentencia que declare la nulidad, producirá también los efectos del matrimonio válido, pero sólo respecto al esposo de buena fe y a los hijos, y no respecto al cónyuge de mala fe.

La nulidad en este caso tendrá los efectos siguientes:

- 1º El cónyuge de mala fe no podrá exigir que el de buena fe le preste alimentos;
- 2º El cónyuge de mala fe no tendrá derecho a ninguna de las ventajas que se le hubiesen acordado en el contrato de matrimonio;
- 3º El cónyuge de mala fe no tendrá los derechos de la patria potestad sobre los hijos, pero sí las obligaciones.

Art. 95. — Si el matrimonio nulo fuese contraído de mala fe por ambos cónyuges, no producirá efecto civil alguno.

La nulidad tendrá los efectos siguientes:

- 1º La unión será reputada como concubinato;
- 2º En relación a los bienes se procederá como en el caso de la disolución de una

sociedad de hecho, quedando sin efecto alguno el contrato de matrimonio;

- 3º En cuanto a los hijos, serán considerados como ilegítimos y en la clase en que los pusiese el impedimento que causare la nulidad.

Art. 96. — Consiste la mala fe de los cónyuges en el conocimiento que hubiesen tenido, o debido tener, el día de la celebración del matrimonio, del impedimento que causa la nulidad.

No habrá buena fe por ignorancia o error de derecho.

Tampoco la habrá por ignorancia o error de hecho que no sea excusable, a menos que el error fuese ocasionado por dolo.

Art. 97. — El cónyuge de buena fe puede demandar al cónyuge de mala fe y a los terceros que hubiesen provocado el error, por indemnización de daños y perjuicios.

Art. 98. — En todos los casos de los artículos precedentes, la nulidad no perjudica los derechos adquiridos por terceros, que de buena fe hubiesen contratado con los supuestos cónyuges.

## CAPÍTULO XIV

### *De las seguridades o ulteriores nupcias*

Art. 99. — La mujer no podrá casarse hasta pasados diez meses de disuelto o anulado el matrimonio, a menos de haber quedado en cinta, en cuyo caso podrá casarse después del alumbramiento.

Art. 100. — La mujer que se casase en contravención del artículo anterior, perderá los legados y cualquiera otra liberalidad o beneficio que el marido le hubiese hecho en su testamento.

Art. 101. — La viuda que teniendo bajo su potestad hijos menores de edad, contrajese matrimonio, debe pedir al juez que les nombre tutor.

Si no lo hiciese, es responsable con todos sus bienes de los perjuicios que resultaren a los intereses de sus hijos.

La misma obligación y responsabilidad tiene el marido de ella.

## CAPÍTULO XV

### *Disposiciones generales*

Art. 102. — Los matrimonios celebrados con posterioridad a la promulgación de esta ley, se probarán en el acta a que se refiere el artículo 45 o su testimonio.

Art. 103. — Si hubiere imposibilidad de presentar el acta o su testimonio, se admitirán todos los medios de prueba; estas pruebas no se recibirán sin que previamente se justifique la imposibilidad.

Art. 104. — La disposición del artículo anterior se aplica:

- 1º Cuando el registro ha sido destruido o perdido en todo o en parte;
- 2º Cuando estuviese incompleto, o hubiere sido llevado con irregularidad;
- 3º Cuando el acta ha sido omitida por el oficial público.

Art. 105. — La sentencia que decida que un acta ha sido destruida, perdida u omitida, será comunicada inmediatamente al oficial público, el cual transcribirá en un registro suplementario que será llevado con las formalidades que prescribe el artículo 54.

Art. 106. — Cuando la destrucción, falsificación o pérdida de un acta de matrimonio dé lugar a una acción criminal, la sentencia que declare la existencia del matrimonio se inscribirá en el Registro de Estado Civil y suplirá al acta.

Art. 107. — La posesión de estado no puede ser invocada por los esposos ni por los terceros como prueba bastante, en cuanto se trata de establecer el estado de casados o de reclamar los efectos civiles del matrimonio. Cuando hay posesión de estado y existe el acta que establece el artículo 45, la inobservancia de las formalidades prescriptas no podrá ser alegada contra su validez.

—En discusión el:

Artículo 108. — El conocimiento de decisión de las causas sobre divorcio o nulidad de matrimonio, celebrado antes o después de la vigencia de esta ley, corresponde a la jurisdicción civil.

**Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.** — No voy a hacer una prolongada discusión en los pocos artículos de esta ley, con que el Poder Ejecutivo no está conforme.

Yo propongo que se supriman de este artículo las palabras «antes o», y que quede así: «El conocimiento y decisión de las causas sobre divorcio o nulidad de matrimonio celebrado después de la vigencia de esta ley, corresponde a la jurisdicción civil.»

No creo que la validez de los matrimonios celebrados con anterioridad a esta ley pueda venirse a discutir ante los tribunales civiles,

puesto que esos matrimonios se han efectuado bajo una legislación muy diversa a ésta.

Esos matrimonios se han celebrado habiendo causas de nulidad en las leyes canónicas que no existen ahora en las leyes civiles, y no pueden estar sujetos a esta jurisdicción, porque eso importa dar a esta ley un efecto retroactivo, y no veo en nombre de qué interés podría hacerse esto.

Yo propongo, pues, que se vote el artículo con la supresión que he indicado.

**Sr. del Valle.** — La Comisión ha estudiado el punto que toca la observación del señor ministro, en las conferencias que ha celebrado con el mismo señor ministro, y antes de ellas; y ha creído que debía insistir en mantener el artículo tal cual está consignado en el proyecto por las razones que voy a exponer con la mayor brevedad.

Las leyes de jurisdicción de los tribunales son leyes de orden público y contra ellas no hay derechos adquiridos.

Los que se han casado bajo el imperio de la antigua legislación pueden tener derecho a que se les aplique aquella ley, en cuanto a su fondo, para decidir de la validez o nulidad de los matrimonios que se celebraron bajo su imperio — y este principio lo reconoce y acepta el proyecto que discutimos, en el artículo siguiente — pero los contrayentes no tienen derecho alguno adquirido, para pretender que ha de continuar la jurisdicción excepcional que ha estado rigiendo hasta este momento y que queda suprimida por el acto de esta ley, para caer bajo la jurisdicción común, que es la legislación general del país.

Por estas razones fundamentales, que tampoco me detengo a detallar, la Comisión insiste en que se mantenga la redacción de este artículo tal cual está.

**Sr. Presidente.** — Se votará por partes este artículo.

—Se vota por partes y es aprobado, lo mismo que los artículos que siguen:

Artículo 109. — Cuando se tratase de un matrimonio celebrado con anterioridad a esta ley y la acción de nulidad se fundare en un impedimento, se aplicarán las disposiciones de esta ley; si la acción se fundare en defectos de forma, se aplicarán las leyes canónicas.

Art. 110. — Las acciones de divorcio y nulidad de matrimonio deben intentarse en el domicilio de los cónyuges. Si el marido no tuviere su domicilio en la República, la acción podrá ser intentada ante el juez del último domicilio

que hubiera tenido en ella, si el matrimonio se hubiese celebrado en la República.

Art. 111. — Toda sentencia sobre divorcio o nulidad de matrimonio será comunicada por el juez de la causa inmediatamente después de ejecutoriada, al oficial público encargado del registro, para que la anote al margen del acta de matrimonio, si éste hubiere sido celebrado con posterioridad a esta ley, o en un registro especial, si se tratase de matrimonios contraídos antes de su vigencia.

Art. 112. — En la capital de la República y territorios nacionales desempeñarán las funciones que esta ley encomienda a los oficiales públicos los jefes de las secciones del Registro de Estado Civil; las mismas funciones serán desempeñadas en las provincias donde hubiere registro del estado civil por los encargados de llevarlo, y donde no los hubiere, por la autoridad judicial del distrito.

—En discusión el:

Artículo 113. — Los ministros, pastores o sacerdotes de cualquiera religión o secta que procedieran a la celebración de un matrimonio sin tener a la vista el acta a que se refiere el artículo 45, estarán sujetos a las responsabilidades establecidas por el artículo 1.081 del Código Civil, y si desempeñasen oficio público, serán separados de él.

**Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.** — Voy a oponerme a la sanción de este artículo, en nombre del Poder Ejecutivo, expresando brevemente las razones que él tiene para no aceptarlo.

Es fuera de duda que la idea dominante en el proyecto del Poder Ejecutivo, sometido a la aprobación del Congreso, es dejar amplia libertad a los que se quieran casar para verificar este acto sin la menor violencia de su conciencia; en una palabra, para cumplir libremente con su conciencia, libertad garantizada por la Constitución.

Es sabido que el hombre de todos los tiempos y de todos los países ha creído que debía rodear su matrimonio de formas religiosas. Por consiguiente, una ley que venga a privarle de estas formas religiosas a su matrimonio, que venga a exigirle que forzosamente, bajo penas, ha de celebrarlo de tal modo, vendría a violar esta garantía preciosa de la libertad de conciencia establecida por la Constitución.

Además, ni este artículo contiene una sanción penal suficientemente represiva para precaver los fraudes que se teme se hagan a la

ley. Dice solamente que los sacerdotes que autoricen un matrimonio religioso sin tener a la vista el acta de haberse celebrado previamente el matrimonio civil, incurrirán en las responsabilidades establecidas por el artículo 1.081 del Código Civil, y que, si desempeñasen oficios públicos, serán separados de ellos.

De manera que los que no desempeñen cargos públicos no sufrirán la misma pena que los que tengan cargos públicos, lo cual es simplemente accidental, y resultarían penados mayormente los que desempeñen un cargo público que los que no lo desempeñan.

La referencia que hace el artículo a las responsabilidades que establece el artículo 1.081 del Código Civil, no importa penalidad alguna, pues en el caso de que quisieran reclamar daños y perjuicios, ¿a quién han de reclamar si los cónyuges se creen bien casados? ¿A quién han perjudicado? Para esto sería preciso que alguno de los cónyuges viniera a reclamar que no estaban casados, y seguramente no estarían casados, porque la ley no reconoce más matrimonio que el matrimonio civil.

Por otra parte, si el acto es posible, por la ley, ¿por qué se castigaría al sacerdote y no a los testigos del acto?

Es fuera de duda que el sacerdote no es más que un testigo en el matrimonio: los que se casan son los cónyuges, y no los casa el sacerdote como no los casa el oficial del registro civil; son ellos los que se casan, los que celebran el acto.

Y sería cosa curiosa que el sacerdote fuera castigado, cuando no es más que un testigo, y los otros quedarán impunes; y que los que han cometido el acto punible, el hombre y la mujer, que se casan, no tuvieran pena alguna.

De manera que el testigo sería el responsable de los daños y perjuicios causados por los que se casan.

Quiere decir que el cómplice pagaría los daños y perjuicios y el autor principal del hecho quedaría libre de toda sanción, porque los testigos no son más que cómplices; los autores principales son el hombre y la mujer que celebran el matrimonio.

Aparte de que no lo deseo, repito, el estado de mi salud no me permite hacer una discusión prolongada con los miembros de la Comisión, pues la hemos tenido ya demasiado larga. Me limito tan sólo a pedir al Honorable Senado que no dé su sanción a este artículo.

**Sr. Cambaceres.** — Pido la palabra.

Yo estoy de acuerdo, señor presidente, con lo que establece el artículo, esto es, que el sacerdote no pueda celebrar el matrimonio sino

teniendo a la vista el acta a que se refiere el artículo 45.

La ley tiene que ser eficaz, sabiendo la oposición que se hace por parte del clero a esta ley de matrimonio.

El clero debe tener conocimiento, porque es ilustrado, de lo que establece la ley; y muchas veces los cónyuges, gente ignorante, hombres primitivos, creerían que estaban verdaderamente casados celebrando el matrimonio religioso, y nos veríamos expuestos a establecer el concubinato, en vez de establecer el matrimonio.

Podrían subsanarse las dificultades anotadas por el señor ministro, en lo que se refiere al artículo 1.081 del Código Civil y a los que desempeñan oficio público, modificando el artículo en estos términos.

Yo desearía que la Comisión aceptara la modificación, porque creo que consulta la opinión de todos.

El artículo podría redactarse en estos términos: «Los ministros, pastores o sacerdotes de cualquier religión o secta que procedieran a la celebración de un matrimonio sin tener a la vista el acta a que se refiere el artículo 45, estarán sujetos a las responsabilidades establecidas por las leyes vigentes.»

**Sr. del Valle.** — Las razones de este artículo fueron enunciadas por mí cuando tuve la honra de hablar sobre las modificaciones en general, en la reunión que celebró en comisión el Senado, y son las mismas que ha apuntado ligeramente el señor senador por la Capital.

La ley que estamos discutiendo tiene por objeto constituir la familia argentina sobre la base de sus preceptos, y por consiguiente es perfectamente lógico con este propósito el que se prohíba la celebración del matrimonio sin llenarse las formalidades que la misma ley prescribe.

Los ministros o sacerdotes de una iglesia cualquiera están tan obligados o más que cualquier otro habitante de la República a cumplir y hacer cumplir, en la parte que les toca, las prescripciones de esta ley, y no podrá deducirse jamás de su investidura sacerdotal la excepción al imperio de las leyes que deben regir el país.

Los inconvenientes que habría en que no se consignara este artículo son visibles, dadas nuestras costumbres y la índole de la masa de nuestra población. Sucedería lo que ha sucedido ya en otros países bajo el imperio de legislaciones que habían omitido este principio.

En España fué necesario, cinco años después de dictada la ley de matrimonio civil, dictar

una ley especial, con efecto retroactivo, declarando válidos los matrimonios que se habían celebrado con violación de sus preceptos. En Italia se promovió la reforma en 1874 al Código Civil dictado en 1865, a consecuencia de igual omisión, porque los matrimonios se celebraban con formas religiosas y quedaban en condiciones de concubinato ante la ley, produciéndose, como resultado inmediato, la familia ilegítima, y el escándalo frecuente de que un hombre casado ante la iglesia abandonaba en seguida a la mujer que se creía bien casada con él, para ir a celebrar un nuevo matrimonio ante el oficial público del Registro Civil, alegando la nulidad del primer matrimonio, y la mujer se encontraba sin acción para hacer cumplir el primer vínculo contraído. Otro tanto sucedió en los Países Bajos donde regía análoga legislación, y he referido cuáles fueron los hechos notorios que motivaron la reforma de aquella legislación, en el año 1830.

Las objeciones que se han hecho a este artículo carecen de fundamento. La responsabilidad civil que se establece es la consecuencia del hecho ilícito que se comete. El sacerdote, el ministro de una iglesia que celebra un acto contra la ley, ejecuta un acto ilícito, y ejecutando un acto ilícito está sujeto a las responsabilidades que la ley común establece para todos los actos ilícitos y no especialmente para tal o cual acto ilícito.

La posibilidad de que la acción se ejercite y tenga procedencia, es clara y manifiesta. Es evidente que si el caso se produce, como el señor ministro lo prevé, de que celebrado un matrimonio ante la Iglesia, los dos cónyuges lo respetan, no habrá acción civil, porque no habrá daño; el daño vendría a producirse en todo caso en relación a los hijos, cuando se tratara de la sucesión o cuando se tratara de fijar el estado civil.

Pero, ¿cuál es la acción que se establecerá, en el caso de que uno de los esposos rompa el vínculo contraído ante la Iglesia? Porque hay que tener en cuenta que no estará obligado ante la ley civil, desde el momento que el matrimonio no se haya celebrado con arreglo a sus preceptos. Los tribunales del país tendrán necesariamente que declarar la nulidad del matrimonio puesto que hay un artículo en el capítulo «De la nulidad», que dice que sólo es lícito el matrimonio que se celebra con arreglo a esta ley.

Entonces sólo habría una persona dañada por aquel acto, que sería el esposo interesado en mantener la validez del matrimonio, contra el esposo interesado en mantener su nulidad y

habría, pues, un perjuicio sufrido, una persona que reclamaría el pago de ese perjuicio, la indemnización de ese daño causado.

El precepto que se establece en este caso tiene, por otra parte, antecedentes en nuestra propia legislación. El Código Civil dispone en uno de sus artículos — el número no lo recuerdo precisamente en este momento — que los sacerdotes, los ministros de la Iglesia, no podrán celebrar matrimonios de menores de edad sin el consentimiento de sus padres o tutores o curadores en su caso, y fija responsabilidad para los ministros de un culto cualquiera que celebren un acto de ese género, y esa responsabilidad es la responsabilidad penal.

En la República de Chile — recuérdese que es un país esencialmente católico — está establecida, desde 1820, análoga responsabilidad para los ministros de la religión católica o de cualquier otra religión, que celebraran matrimonios sin sujetarse a la forma, a las prácticas que la misma pragmática o ley prescribe de obtener el consentimiento de los padres, tutores o curadores, tratándose del matrimonio de menores.

Por consiguiente, la disposición que en este momento sostenemos no tiene nada de excepcional ni de violatoria de los principios que nos rigen ni de la libertad.

La libertad es libertad dentro de la ley. La ley sanciona que el matrimonio debe celebrarse así; esto no obsta a que cada uno dé cumplimiento a los votos de su conciencia en la forma que ella se lo exija.

El señor senador por la Capital ha indicado una reforma al artículo, que la Comisión en su mayoría me parece que acepta y sólo me permito pedirle al señor senador que acepte este agregado al artículo: «Estarán sujetos a las responsabilidades establecidas...» — por las disposiciones vigentes, decía el señor senador.

**Sr. Cambaceres.** — Por las leyes vigentes.

**Sr. del Valle.** — «Por las leyes vigentes, y si desempeñasen oficio público serán separados de él.»

Voy a explicar la razón del agregado.

Con sujeción a las leyes canónicas, los matrimonios en las iglesias católicas no pueden celebrarse sino por el párroco o quien lo represente.

Si nosotros establecemos esta disposición, equivale a decir que los sacerdotes o ministros de la Iglesia católica no celebrarán ni autorizarán a otro, a que celebre matrimonio con violación de esta ley. Quiere decir más: que si infringieran la ley en esta parte, estarán suje-

tos a ser separados del oficio público que desempeñan. Y digo oficio público, porque así se llama el oficio de cura párroco, confiado a estos funcionarios de la Iglesia. En el ejercicio del patronato entra la atribución de intervenir en el nombramiento de los párrocos, atribución que se ejercita directamente por el patrono, o que puede ejercitarse en lo capital directamente por el patrono, o que puede ejercitarse o se ejercita indirectamente por los vicepatronos en todos los Estados de la Nación.

Por consecuencia, la prohibición de la ley es eficaz. Responde a una verdadera exigencia de orden público, y me parece conveniente mantenerla.

Si el señor senador se hubiera dado cuenta de su verdadero alcance, hubiera introducido su modificación dentro de sus términos, no alterando la legislación penal en cuanto a lo demás.

**Sr. Cambaceres.** — Yo quiero que se aplique la ley penal, que es mucho más severa, porque de otra manera se viola la ley.

Por consiguiente, dadas las razones del señor senador, no podría suprimirse esa parte: «si desempeñasen oficio público serán separados de él...»

En lugar del artículo 1.081 del código, poner: «las leyes vigentes».

**Sr. del Valle.** — Si me permite, voy a indicar otra modificación.

El artículo dice: «Los ministros, pastores o sacerdotes de cualquier religión o secta que procedieran a la celebración de un matrimonio sin tener a la vista el acta etcétera...», debe decir: «que procedan a celebrar o autorizar la celebración de un matrimonio».

**Sr. Cambaceres.** — ¿Y por qué en vez de «tener a la vista», no decir: «sin previo conocimiento»?

Porque, tener a la vista, no quiere decir que tenga conocimiento de ella.

**Sr. del Valle.** — Es el sentido del artículo...

**Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.** — Voy a decir dos palabras.

El artículo de la Comisión tiene todos estos inconvenientes.

El sacerdote no es más que un testigo; no es el ejecutor del acto. Suponiendo que así está establecido en la Iglesia católica, si dos individuos, un hombre y una mujer, acompañados de dos testigos, sorprenden a un cura, el casamiento queda hecho. No hay aquí culpables. ¿O también se castigará al cura por haber oído decir a ese hombre y a esa mujer que quieren tomarse como esposos? Indudablemente, no.

Si este cura, pastor o rabino, no por celebrar el matrimonio, sino por autorizar el matrimonio con su presencia, es culpable, ¿por qué no lo son los otros testigos, sin cuya presencia en ese acto el matrimonio no tendría efecto? ¿Cómo no lo son el marido y la mujer que han ejecutado ese hecho?

Venimos, pues, a lo que decía antes: que son culpables los cómplices y no los autores del hecho.

Esto me parece que es contra toda noción de penalidad.

El señor senador nos citaba inconvenientes que se habían producido en otros países, pero esto no puede dar motivos fundados para que se tema que sucedería lo mismo aquí.

En España abunda mucho el fanatismo. Nuestro país es de reciente población, de activo comercio, que absorbe población de todas partes del mundo y que, por fortuna, marcha a paso rápido por las ideas liberales, absteniéndose de ideas fanáticas.

No creo, pues, que haya estos temores, para poner leyes represivas de la libertad, porque cada uno debe hacer su casamiento como su conciencia se lo dicte, para que no experimente violencia.

La libertad, señor presidente, nunca ha hecho mal a nadie. La libertad es la fuente de los más grandes bienes que pueden venir para la humanidad. Jamás es causa de daño.

¿Por qué se quiere coartar esta libertad?

Se dice que vivirán amancebados. ¿Y dónde está la ley que prohíbe el amancebamiento? Ni en el Código Civil ni en el Código Penal está prohibido el amancebamiento.

De manera que se producirá, ¿qué situación? ¿De un amancebamiento legal? Pero es que este acto no está prohibido por la ley. Comiencese por prohibirlo. Más: en nuestra legislación anterior estaba permitido el amancebamiento, hasta de los clérigos.

Las leyes españolas legislaban la barragana: los derechos que la barragana tiene; los derechos que tiene el mancebo; los derechos que tienen los hijos; reputando esos contratos con ciertos efectos civiles; haciendo más que lo que haría la ley si dos individuos contratasen amancebarse delante de un cura o de uno que no lo sea.

Todas estas leyes existen. Por ejemplo, cuando había de tomarse por barragana a una viuda honesta, exigían esas leyes que no la podían tomar como tal barragana sino delante de testigos.

¡Y ahora viene a prohibírsele!

La sanción verdadera, la sanción fuerte está en la misma ley; porque, los que se casan, si no se casan civilmente, no son marido y mujer, los hijos que engendren no son hijos legítimos, y es necesario no tener amor de padre o amor legítimo para no consagrar ante la ley del país su unión y sus hijos.

Yo no sé, pues, que tales males habrían de venir al país, que tales inconvenientes se habrían de producir.

Yo no creo que dos personas que se casan según su conciencia y religión, no vengán a legitimar su matrimonio delante del Registro Civil.

Pero, sí, nos podría dar resultados espantosos la legislación contraria. Podría suceder si se aprobase, como se ha aprobado en Francia y otras partes, la celebración del matrimonio religioso antes del matrimonio civil.

Puede suceder, por ejemplo, que el novio le diga a la novia: «Sí, vamos a casarnos civilmente, en seguida iremos ante el cura.» Pero, hecho el matrimonio civil, decirle: «No, ese es un acto de fanatismo.» Y entonces producir esta situación espantosa: que la Nación entera pone su poder para sacrificar a una mujer desgraciada, obligándola a hacer vida marital con un hombre, con quien, según su conciencia, no está casada.

¡Nunca, jamás puede la ley amparar esta violencia, esta espantosa violencia, esta vida tremenda, que llevará esta pobre mujer, viviendo con un hombre que no es su marido, según su conciencia!

Mientras tanto, de este otro modo se han casado religiosamente.

Este matrimonio no es válido, según la ley, la mujer no se entrega al marido; está en sus manos evitar todos los males que puedan sobrevenir celebrando antes el matrimonio civil. ¿Por qué? Porque el otro matrimonio no es válido.

Yo citaré también ejemplos de naciones muy adelantadas que han legislado el matrimonio de esta manera, realizando verdaderas atrocidades contra una mujer, como decía, yendo el poder de la Nación contra una débil mujer, haciéndola vivir vida marital...

**Sr. Cambaceres.** — Perdóneme el señor ministro.

En antenasalas, hablando con un señor senador que conoce mucho su provincia, y a quien respeto por su inteligencia, me ha dicho que en su provincia no se casaría nadie ante la autoridad civil; que se considerarían casados ante el párroco o cura, y que los que fueran a casarse pagarían la multa que se le impusiera al cura.



Véase lo que puede suceder, y los trastornos que esta disposición puede traer en la práctica.

**Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.** — Creo que el señor senador se refiere al señor senador por Catamarca...

**Sr. Cambaceres.** — Me he referido a un señor senador a quien respeto mucho y que me merece mucha fe.

**Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.** — Yo he escuchado un poco esa conversación, y, si no recuerdo mal, creo que el señor senador por Catamarca no se expresó de la manera que dice el señor senador por la Capital.

**Sr. Cambaceres.** — Sí, señor, y fué hasta decir que todos pagarían la multa.

**Sr. Navarro.** — Decía eso, en el caso de que se exigiese que se celebrase el matrimonio civil antes que por la Iglesia.

**Sr. Cambaceres.** — Que se consideraba válido solamente el matrimonio religioso.

**Sr. del Valle.** — Voy a dar breves razones insistiendo en mi indicación.

El señor ministro dice que él considera que hay un error jurídico al imponer dos penas y responsabilizar civilmente al ministro de una religión cualquiera que, por sorpresa, interviene en un acto como el matrimonio.

El artículo que proponemos no dice semejante cosa.

**Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.** — No he querido decir eso.

**Sr. del Valle.** — El señor ministro decía esto: puede suceder que dos personas dispuestas a casarse con las ceremonias religiosas concurren a la Iglesia, y, en presencia del párroco, se declaren casados.

**Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.** — Decía que podría ocurrir el mismo hecho con un matrimonio religioso, y que la ley no castiga a nadie; que, por consiguiente, el proyecto de la Comisión era poco eficaz.

**Sr. del Valle.** — Pero en el caso previsto por el señor ministro, del matrimonio por sorpresa, que las leyes canónicas consideran válido, no lo sería ante la ley civil si no se formalizase ante ella. Si hubiera partes perjudicadas serían las mismas que han celebrado el acto.

Por consiguiente, no tendrían contra quién ni de quién reclamar de ese perjuicio, y no tendrían derecho de hacer cargos a ningún sacerdote, porque la culpa sería de ellos, que no habían cumplido con la ley.

Ese caso está completamente excluido del

proyecto que discutimos, y está excluido con fundado motivo, como se ve.

La hipótesis indicada por el señor ministro, de que puede llegar el caso de que un hombre engañe a una mujer, la lleve ante el funcionario civil y, una vez celebrado el matrimonio ante él quiera ejercer sus derechos de marido, sin tener en cuenta sus escrúpulos de católico, o del credo a que pertenezca, es efectivamente un caso que ha debido tenerse presente, y que la Comisión lo ha tenido en cuenta.

Cuando informamos respecto de las reformas introducidas al proyecto del señor ministro, nos detuvimos expresamente en ese punto.

Para contestar en gran parte la alarma del señor ministro, bástame decir que en medio siglo que ha regido esta ley en Francia, sólo se ha producido un caso de esta naturaleza.

**Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.** — Basta; y la ley no debe ampararlo.

**Sr. del Valle.** — En efecto, esta ley provee esa deficiencia de la ley francesa, teniendo presente ese único caso que se ha producido bajo el imperio del Código francés.

La Comisión ha propuesto que los cónyuges, cuando lo deseen, pueden hacer bendecir la unión ante el oficial público y en el acto de celebrar el matrimonio ante él.

**Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.** — Después.

**Sr. del Valle.** — Después de haber prestado el consentimiento. Basta haber expresado el consentimiento de firmar el acta y que se pueda comprobar aquel acto.

La ley autoriza a los esposos a que hagan bendecir su unión con el sacerdote de su credo; y a este respecto es bueno que los señores senadores tengan presente que con arreglo al credo de la Iglesia católica — que es en realidad de lo que se trata — con arreglo a las leyes canónicas que rigen el matrimonio, el casamiento celebrado en presencia del párroco, o de su delegado, es perfectamente válido para la Iglesia; están revestidos todos los caracteres del sacramento, sin que sea necesaria palabra ni bendición alguna del sacerdote, de tal manera que el solo hecho de que un párroco, o su representante, se encuentre en presencia del oficial público, donde las partes manifiestan el consentimiento de casarse, basta, no sólo para que revistan todos los caracteres civiles, sino también todos los caracteres sacramentales que el más escrupuloso espíritu religioso podrá exigir. De esta manera se salva el menor escrúpulo que pudiera existir para aceptar la disposición que la Comisión proyecta.

La observación que ha marcado eficazmente el señor senador por la Capital, pues, no deja lugar a cavilaciones. Si hay la posibilidad de que la familia argentina se constituya en una, dos o más provincias sobre la base del matrimonio religioso, que será concubinato para la ley, nosotros no podemos con conciencia y a sabiendas crear esta situación legal; y si está prohibida la barraganía, si está prohibido el amancebamiento, ¿por qué no podemos prohibir esto? No; la Comisión ejerce una función tutelar en este caso, cuando viene a discutir disposiciones de carácter general para regularizar estas disposiciones sociales y para amparar, no sólo a los que sabemos cómo ejercitamos estas funciones en la vida civil, sino a todos aquellos que se dejan llevar por las personas a quienes están acostumbrados a respetar, y cuya cultura intelectual les da mayores títulos a su consideración.

Sabemos perfectamente la influencia que ha ejercido y está ejerciendo todavía el clero católico; sabemos que hasta este momento el clero católico resiste esta ley de matrimonio civil, que probablemente la continuará resistiendo, y que, por consiguiente, es necesario que nos coloquemos en el terreno práctico cuando legislamos, si queremos que se cumpla esta ley, si queremos que la familia argentina se constituya sobre la base legal, y no sobre la base del amancebamiento legal. (*Aplausos*).

**Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.** — Me permito preguntar lo siguiente al señor senador. En el caso de que dos se casen religiosamente después de prestar su consentimiento, y suponiendo que usasen de este derecho, ¿cuál casamiento se verifica antes: el civil o el religioso?

**Sr. del Valle.** — El civil, indudablemente; porque, para la ley, no hay otro.

**Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.** — ¿Cuál de los dos se verifica antes?

**Sr. del Valle.** — Perdone; para la ley civil no hay más que uno.

El artículo dice que podrán hacer bendecir su unión.

**Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.** — Con el sacerdote de sus creencias. El señor senador decía que esto lo podían hacer antes de contraer el matrimonio civil.

**Sr. del Valle.** — No señor, de ninguna manera antes de firmar.

**Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.** — La versión taquigráfica podría sacarnos de dudas.

**Sr. del Valle.** — Es posible que se me haya escapado alguna palabra que pueda haber dado ocasión al juicio del señor ministro.

**Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.** — El artículo de la Comisión tiene este otro inconveniente. Dice: el funcionario público será destituido. ¿Será destituido el obispo?

**Sr. del Valle.** — El párroco, que es el que autoriza el matrimonio.

**Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.** — Pero el obispo puede también autorizar el matrimonio con tanta jurisdicción como el cura.

**Sr. del Valle.** — Si la lógica nos obliga a este extremo, cedemos a la lógica...

**Sr. Cambaceres.** — Sería más culpable el obispo.

**Sr. del Valle.** — Entonces, sería el caso de extrañamiento, que es la forma de destituir a los obispos. En la historia argentina hay algunos casos de éstos.

**Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.** — ¿Cómo se va a destituir a un obispo que no ha sido hecho tal por el poder temporal?

**Sr. del Valle.** — Se extraña. Lo sabe perfectamente el señor ministro.

Es la única manera de separar de su oficio a un obispo.

**Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.** — Yo estoy discutiendo la ley. La ley dice «destituir».

**Sr. del Valle.** — Será separado de su oficio; y la única manera de separarlo, es por medio del extrañamiento.

**Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.** — ¿Cómo se va a separar un obispo, a cuya elección concurren el poder temporal y el poder espiritual?

**Sr. del Valle.** — Por el extrañamiento, repito. Un ministro de la Nación no puede poner en duda la facultad de la Nación para hacerlo.

**Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.** — La ley autoriza a destituir...

**Sr. del Valle.** — A separar de sus funciones. ¿Cómo se separan los obispos? Quitándoles la jurisdicción que le dió el poder civil.

**Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.** — Por las leyes de España se separaba a los obispos mandándolos a luengas tierras, en épocas en que no había ni buques.

**Sr. Cambaceres.** — Nosotros los mandaremos en ferrocarril. (*Risas*).

**Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.** — Podrá ser un chiste lo que dice el señor senador por la Capital; pero, no es razón.

**Sr. del Valle.** — El señor senador por Mendoza me recuerda el caso de cómo se separó al señor Clara.

**Sr. Zapata.** — Cuando desacató una ley del Congreso.

**Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.** — El señor Clara no ha sido destituido.

Ahí están los decretos del gobierno destituyendo al vicario de Salta señor Feijoo, y éste ha muerto de vicario a pesar de este decreto.

**Sr. del Valle.** — ¿Por qué no lo extrañó?

**Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.** — Ahí existe otro decreto suspendiendo al obispo Riso; sin embargo, murió Riso sin darse por suspendido.

Son, pues, cuestiones éstas que estamos muy lejos de poderlas resolver en este momento ni de poderlas resolver con mucho estudio, dado lo imperfecto de lo establecido al respecto por nuestra legislación.

**Sr. del Valle.** — Cuando se toma un mal camino, se equivoca siempre. El señor ministro no ignora el procedimiento para privar de su oficio, de su jurisdicción.

**Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.** — Dígalo entonces la ley.

**Sr. del Valle.** — Lo dice: «y separarlo de su oficio». Lo que quiere decir que se le quita la jurisdicción que ha recibido de la soberanía nacional.

**Sr. Zapata.** — Y no la podría tener si no se la diera el Poder Ejecutivo.

**Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.** — No se la ha dado ni el Poder Ejecutivo ni el Congreso tampoco.

**Sr. Presidente.** — Están prohibidos los diálogos.

Se va a votar el artículo en la forma propuesta por el señor senador por la Capital, y aceptada por la Comisión.

**Sr. Rodríguez (C. J.).** — ¿Después que se vote el artículo propuesto por la Comisión, se pondrá en discusión la moción del señor ministro?

**Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.** — Mi moción es que se rechace el artículo.

**Sr. Rodríguez (C. J.).** — Yo he firmado el despacho sin comprender ni darme cuenta del alcance que tiene este artículo; ahora que he escuchado las observaciones que se han hecho, voy a votar en el sentido de las ideas del señor ministro: por el rechazo.

**Sr. Funes.** — Pido la palabra.

Yo no voy a hacer un discurso.

Conozco el proyecto sancionado en Italia por la Cámara de Diputados y remitido al Senado. En él se imponen penas a los contrayentes y a los testigos y se fijan penas severas; pero aquí no se dice nada de eso...

**Sr. del Valle.** — Eso lo dice el Código Penal.

**Sr. Funes.** — Bien; el Código Penal fijó esas penas; pero aquí solo se trata de privar de su oficio...

**Sr. del Valle.** — Al cura.

**Sr. Funes.** — Y eso es lo más grave; porque allá siquiera la ley es equitativa: castiga a todos los criminales, a los testigos y a los contrayentes; pero aquí sólo se castiga al cura. Solamente porque lleva sotana. (*Risas*). Llama la atención, señor presidente, que los autores clasifican de severas esas penas que se imponen por el proyecto enunciado. Pues bien, todas esas penas se limitan a prisión de ocho días o un mes. Y aquí se quiere acumular penas, y además la privación de oficio al cura o pastor de la confesión respectiva.

**Sr. del Valle.** — En el Código Penal está previsto y regido el caso a que el señor senador se refiere. Están castigados los contrayentes y los testigos.

**Sr. Funes.** — Sí, en el Código Penal. Esto podría repetirlo al señor senador que ha hecho indicación...

**Sr. Zapata.** — Es la modificación propuesta por el señor senador por la Capital.

**Sr. Funes.** — ... «de las leyes vigentes», porque no decía nada de los testigos y de los contrayentes: se refería a las leyes vigentes pero no citaba cuáles eran.

**Sr. Zapata.** — Las sabía.

**Sr. Funes.** — Ahora lo va a saber.

**Sr. Cambaceres.** — Le agradezco.

**Sr. Funes.** — No hay por qué agradecer.

En España se dió la ley en 1870. ¡Después de una revolución vienen estas novedades! A los cinco años se modificó y se reconoció como válido el matrimonio religioso, exigiéndose solamente el registro. Y saben los señores senadores que así sucedió en España y así se observaba actualmente.

Un señor senador citaba la conversación con otro senador, quien le decía que a pesar de es-

ta ley ningún hombre se iba a casar civilmente.

Yo he oído a otro senador — senador por senador — que dice: todos se van a casar civilmente, porque en la actualidad no se casan los pobres por no tener con qué pagar; y que como esto va a ser gratis, todos se van a casar...

**Sr. Cambaceres.** — Eso será en Mendoza; pero no en Catamarca. (*Risas*).

**Sr. Funes.** — ¡Donde quiera que sea!

**Sr. Baibiene.** — Pido la palabra.

Voy a votar por el artículo tal como lo ha redactado la Comisión. Me parece que es uno de lo más importantes que contiene la ley, y que éste y algunos más constituyen, lo que podría decirse, el eje de la ley.

Excluido este artículo, la gloria de la iniciativa de esta ley, que la tiene el señor ministro, desaparecería, porque la ley quedaría sin efecto.

Es menester entrar en el terreno de la práctica para comprender lo que pasaría; y si yo fuera ultramontano, si fuera clerical y pensara que el matrimonio debe celebrarse siempre, como hasta ahora se ha hecho, nada más que ante la iglesia, votaría también el artículo por que no quería que el clero que hasta la sanción de esta ley consagraba los matrimonios verdaderos, fuese destinado a esto que sucedería necesariamente en la práctica: a consagrar el concubinato en la República, lo cual por cierto, no es una misión muy honrosa ni muy elevada.

Por esta razón voy a votar por el artículo. (*¡Muy bien!*).

**Sr. Presidente.** — Se va a votar el artículo.

**Sr. Cambaceres.** — Podría leerse nuevamente.

—Se lee:

Artículo 113. — Los ministros, pastores o sacerdotes de cualquier religión o secta que procedieran a la celebración de un matrimonio sin tener a la vista el acta a que se refiere el artículo 45, estarán sujetos a las responsabilidades establecidas por las leyes vigentes, y si desempeñasen oficio público, serán separados de él.

—Se vota en seguida el artículo y es rechazado por 11 votos contra 10.

**Sr. Baibiene.** — Pido que se rectifique la votación.

—Se rectifica y da el mismo resultado.

**Sr. del Valle.** — Suprimida esta disposición, tendremos que declarar válidos todos los matrimonios dentro de cinco años.

**Sr. Funes.** — Se hará lo que se hará.

—En seguida se aprueban sin observación los siguientes artículos:

Artículo 114. — Incurrirá en una multa de cincuenta a doscientos pesos el oficial del Registro Civil que no hubiere hecho la publicación en la forma que establece la ley, o que la hubiese hecho sin habérsele presentado antes la declaración y los documentos exigidos por los artículos 17 y 18.

Art. 115. — Incurrirá en una multa de doscientos pesos el oficial público que celebre un matrimonio sin hacerlo preceder de la publicación prescripta por la ley, salvo lo dispuesto en el artículo 51.

Art. 116. — Será castigado con prisión de uno a tres meses y con pérdida del oficio el oficial público que casare a un menor sin el consentimiento de sus padres, tutores o curadores, o del judicial en su defecto, y con prisión de uno a dos años y con multa de cien a quinientos pesos aquel que celebre un matrimonio sabiendo que existe un impedimento que puede ser causa de la nulidad del acto.

Art. 117. — Incurrirá en la multa de cien a quinientos pesos el oficial del Registro Civil que contravenga cualquiera de las otras disposiciones de la presente ley.

Art. 118. — El cónyuge que hubiera contraído matrimonio conociendo la existencia de alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 90 y que haya producido su nulidad, responderá al otro de la pérdida e intereses, sin perjuicio de la acción criminal que corresponda. Si el daño efectivo no pudiese ser fijado, el juez apreciará el daño moral en una cantidad de dinero proporcionada a las circunstancias del caso.

Art. 119. — La aplicación de las penas establecidas en los artículos precedentes será pedida por el ministerio público ante el juzgado competente.

Art. 120. — Deróganse todas las disposiciones del Código Civil relativas a hijos sacrilegos. Los que actualmente son llamados hijos sacrilegos tendrán la filiación que les corresponda según las disposiciones civiles que quedan vigentes.

Art. 121. — Los registros públicos que debían ser creados por las municipalidades según el artículo 80 del Código Civil, deberán serlo por las legislaturas respectivas.

—Se lee:

Artículo 122. — El artículo del Código Civil queda reformado como sigue: «La filiación legítima se probará: por la inscripción del nacimiento en el Registro Civil donde exista y a falta de éste por la inscripción en el registro parroquial y por la inscripción del matrimonio en el Registro Civil desde la vigencia de esta ley y en los parroquiales antes de ella. A falta de inscripción o cuando la inscripción en los registros se ha hecho bajo falsos nombres o como de padres no conocidos, la filiación legítima puede probarse por todos los medios de prueba».

**Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.** — Tengo también encargo del señor presidente de la República, para oponerme decididamente a este artículo y para proponer una enmienda que cohoneste todas las opiniones legítimas que se puedan tener sobre este punto.

El artículo, como está redactado, daría desde luego lugar a que fueran entregados los sacerdotes a la burla y al sarcasmo de la gente de buen humor.

Sería lo más fácil que al arzobispo o cualquiera otro sacerdote constituido en dignidad, les saliesen a montones hijos naturales que fuesen a averiguar su paternidad, aunque no fuera sino buscando una befa sangrienta.

En la conferencia que he tenido con los miembros de la Comisión, se dijo que la razón que había para establecer esta modificación era que, según esta ley, no es impedimento para casarse el carácter sacerdotal.

Pero esto no es tan exacto, señor presidente, no es impedimento para casarse haber sido sacerdote, haber sido monje, haber sido fraile; todos estos pueden casarse abjurando su religión, usando de un derecho que la Constitución les da, de profesar el culto que quieran, y así como un judío usa de una garantía constitucional haciéndose católico, un católico usa del mismo derecho haciéndose judío.

Entonces, si un sacerdote católico se hace protestante, puede perfectamente casarse, y digo que, aunque no haga abjuración en otra forma, basta el hecho de casarse, porque indudablemente abjura una religión, cualquier persona que se ha obligado y no cumple los preceptos de su religión.

Así, pues, no es tan exacto que el carácter sacerdotal sea un obstáculo, un verdadero impedimento para el matrimonio; un clérigo católico no puede casarse y quedar clérigo cató-

lico, ni un fraile quedar fraile católico; el hecho de casarse importa la abjuración de su religión.

Yo no veo qué interés se pueda consultar con esta modificación tan substancial que tiene hasta ligamentos con muchas otras disposiciones del código, como la ley sobre la herencia, para no ir contra las conveniencias generales.

Mientras tanto, no se consulta ningún interés social; se entrega, como decía, a la befa de la gente de buen humor a todo el sacerdocio y principalmente al católico.

¿Y por qué hemos de colocarnos en esta situación? ¿buscando qué interés?

Se dice, en términos generales, que el hijo que es engendrado tiene derecho de averiguar quién es su padre y que el hijo adulterino debería tener el mismo derecho; pero, la ley no se lo da, porque tiene en cuenta otros intereses sociales de orden diverso.

Todavía más. Voy a este caso, señor presidente. Un hijo tenido por una mujer soltera, si ella se casa con otro, ese hijo no puede investigar la maternidad, y el derecho que tenía adquirido a investigar su maternidad, lo pierde por un hecho ajeno a la disposición general, violando, se puede decir, un interés individual ante el interés social; y este interés social va a ser comprometido, va a ser sacrificado autorizando que se indague la paternidad o la maternidad de monjas profesas, frailes y obispos.

Yo me permitiría indicar, para salvar que se diga que los hijos de un clérigo casado son sacrílegos, que, al final del artículo 340 del Código Civil se agregue únicamente estas palabras: «concebido durante el estado religioso del padre o de la madre.»

**Sr. Derqui.** — Pero antes del estado religioso de los padres, los hijos no son sacrílegos; y, por otra parte, los hijos nacidos en virtud de matrimonio celebrado por esta ley son legítimos; de manera que no altera nada.

**Sr. del Valle.** — Pido la palabra.

Toda la dialéctica del señor ministro no ha de servirle para demostrar jamás que el voto o la orden es un impedimento para celebrar matrimonio con arreglo a la ley. Ella enumera expresamente cuáles son los impedimentos para el matrimonio, y esa enumeración no es meramente enunciativa, sino que es una enumeración limitativa, puesto que en otros artículos de la misma ley se prescribe que no hay más impedimentos que los que esta ley prescribe: que todo matrimonio que no tenga uno de estos impedimentos podrá celebrarse válidamente: que ningún oficial público ha de poder oponer-

se a la celebración de matrimonios que están en tales condiciones.

Por consecuencia, es fuera de toda cuestión que, con arreglo a la ley que estamos discutiendo, el voto y la orden no son absolutamente impedimentos para celebrar el matrimonio.

Ahora bien: ¿Cuál es la consecuencia de este primer principio que podemos establecerlo de una manera indiscutible? Que si no hay impedimento para que dos personas en tales condiciones se casen, los hijos que nazcan de la unión de estas dos personas serán legítimos, si el matrimonio se ha celebrado y puesto que se habrá procedido con arreglo a la ley; serán naturales los hijos, si el matrimonio no se ha celebrado, y si ha quedado en las condiciones de unión de mujer y hombre que han podido libremente casarse; de estas uniones los hijos que nazcan serán incestuosos o tendrán alguno de los otros caracteres que las leyes generales prescriben, si se encuentran en su caso.

Esto es lo que la lógica claramente nos fija, como la situación legal de los hijos que nacen de estas uniones.

Pero, se dice: «hay paridad de casos entre la situación en que se coloca al hijo adulterino y la del hijo sacrílego; y así como no se le da acción al hijo adulterino para investigar su paternidad, tampoco se le da al hijo sacrílego, en su caso.»

La situación es bien diversa: las razones de una prohibición legal no son las razones del proyecto.

En el caso del hijo adulterino, la razón es que se va a perturbar la armonía de la familia y a herir en lo más sagrado que el hombre tiene a un inocente, al esposo del adúltero; y es en resguardo, en garantía, en preservación de la tranquilidad del hogar, que la ley evita la investigación de la paternidad en el caso de la mujer casada, cuando se trata del hijo adulterino.

Pero en el caso que ahora se trata y que discutimos, ¿en obsequio a qué consideración de moral o a qué principio o dogma, vamos a establecer esta excepción contra naturaleza, esta excepción odiosa, esta excepción insostenible al derecho que todo hombre tiene de averiguar quién es su padre o quién es su madre, para exigirles el cumplimiento que la naturaleza les impone como padre o como madre? ¿Vamos a establecer esta excepción a las leyes naturales, podría decirse hasta a las leyes divinas, en obsequio a las faltas o a las debilidades del hombre, que habiendo aceptado como obligación el voto solemne de castidad, ha fal-

tado a ese voto y ha seguido las leyes de la naturaleza, buscando el hombre a la mujer o la mujer al hombre?

Me parece, señor presidente, que las situaciones son tan divergentes en el caso del hijo adulterino y en el caso del hijo sacrílego, que realmente no han podido confundirse. Y cuando nos encontramos con el texto de una ley como ésta, que principia declarando que no hay más impedimentos que los que ella establece, no podemos a renglón seguido, después de lo que acaba de establecer el Senado, venir a prescribir que hay también impedimentos de carácter religioso, y que estos impedimentos se antepongan a todos los preceptos de la ley civil.

Como argumento de gran peso, se ha dicho que podría perturbarse a los prelados de la Iglesia en su respetable quietud, con la imputación de hijos sacrílegos.

Señor presidente: el caso es posible. Pero, ¿tiene mayor derecho a la protección de la ley, el prelado de la Iglesia que el que tiene un hombre honrado, que cumple sus deberes sociales virtuosamente? Y si cada uno de nosotros está sujeto a acciones de esa naturaleza, que pueden ser la consecuencia de los propios errores, o las confabulaciones o maquinaciones de nuestros enemigos, ¿qué razón hay para crear esta situación excepcional en favor de un cuerpo, de una casta, de una secta, cuyos miembros se encuentran colocados en las mismas condiciones de los demás?

¿Queremos establecer el principio? Prohíbese entonces la investigación de la paternidad lo mismo que la maternidad, cuando se trate del adulterio. Váyase más lejos: prohíbese la investigación de la maternidad o de la paternidad, sean naturales, sacrílegos o adulterinos, o como fueran. A eso obligaría la lógica del señor ministro.

Pero se podría decir que la lógica no obliga a mucho. En efecto, testimonios elocuentes recibimos cada día de esta falta del imperio de las leyes del raciocinio que obligan la conducta humana: pero no tardan en producirse las consecuencias. Se violentan las leyes de la lógica, que son las leyes de la razón, e inmediatamente el mal se produce, y se produce por donde la violación del principio se ha introducido.

La excepción que propone el señor ministro como transacción entre las ideas de la Comisión y las que él sostiene, no es tal transacción. El señor ministro pretende hacer creer que introduce una modificación a la legislación actual. No introduce modificación alguna; lo

que el señor ministro quiere es hacer persistir en la legislación civil, la base, el principio de la legislación canónica que estamos reformando en este momento.

La ley canónica declara que es sacrilego el hijo de la monja o del monje, el...

**Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.** — El Código Civil.

**Sr. del Valle.** — La ley canónica; he dicho bien.

La ley canónica también declara sacrilego al hijo en estas condiciones. La ley civil, aceptando los mismos principios, los ha consagrado.

El señor ministro lo que nos propone es que digamos que son sacrilegos los hijos habidos por monjes o monjas, cuando son estos hijos concebidos durante el estado de monja o sacerdotal.

¿Cuál es la teoría que el señor ministro introduce?

El señor senador por Corrientes le observaba con razón: si el matrimonio ha sido antes de estar investido de este carácter, el hijo no es sacrilego, con arreglo a la legislación actual. Si el hijo fuera concebido después de roto aquel vínculo, — por lo menos debe suponerse que la Iglesia reconoce derecho para romper aquellos vínculos, porque la ley civil no habla de semejante cosa — resultaría que no era tampoco un inconveniente la ley actual.

Pero el señor ministro decía: es que bastaría el hecho de casarse, para que el sacerdote deje de ser sacerdote, para que el monje deje de ser monje, porque habría incompatibilidad entre esta situación inmutable de casado con los preceptos que su carácter de monje le impone.

Habría incompatibilidad para ser monje, no habría incompatibilidad para ser casado. Esta es la diferencia de situaciones que el señor ministro no notaba.

Decía: en el monje hay incompatibilidad para casamiento. Nosotros no tenemos que saber lo que está permitido o prohibido a los monjes, lo que tenemos que saber es que el casamiento es permitido a los hombres. Sería cuestión de conciencia para el monje, sería cuestión para la Iglesia saber si el casado puede o no ser monje.

Bueno es recordar, sin embargo, que esta misma cuestión del celibato de los clérigos, y disposiciones análogas, no han sido establecidas de una sola vez en el campo eclesiástico.

Por estas razones me parece que la Cámara debe aceptar el artículo tal cual ha sido redactado por la Comisión, pues responde a toda la índole del proyecto.

**Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.** — El señor senador ha tratado de interesar el sentimiento al hablar de los hijos naturales.

Dando por supuesto que todo el que viene a buscar un padre, ese padre...

**Sr. del Valle.** — Lo tiene.

**Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.** — Es natural, no ha de ser hijo del viento.

Es fuera de duda que cuando la madre de ese niño pretende que ese hombre es el padre, es porque realmente es el padre. La verdad es ésta.

En más de dos años que he tenido el honor de pertenecer a la Cámara de lo Civil de la Capital, no ha habido un solo juicio de paternidad contra un hombre pobre, y tampoco ha muerto un hombre rico a quien no le hayan salido hijos naturales. No van a buscar la posesión de estado, van a buscar los pesos que deja el muerto. Esto es lo que van a buscar.

El señor senador nos pintaba la situación desesperada del niño que no sabe dónde está su padre, que no tiene el derecho de investigarlo. ¿Y qué es lo que le sucede al hijo de una mujer soltera, a ese hijo natural cuando la madre se casa?

No puede buscar quién es su madre; sin embargo, se admite que el niño pierda su derecho, en virtud de un derecho ajeno. ¿En virtud de qué? De una mujer que ha engañado; porque, si esa mujer hubiera procedido con nobleza, manifestando su situación, quizá el hombre no se casa con ella.

**Sr. del Valle.** — Es en resguardo del marido.

**Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.** — De manera que a quien viene a resguardar es a la mujer, a tapar su culpa, rompiendo contra todo principio de legislación, de modo que el derecho de una persona empeora por el hecho ajeno.

Nos decía el señor senador: ¿y qué tiene de raro que el padre, o sacerdote o monja tengan un hijo antes o después de casarse? ¿Y que tiene de raro que una mujer casada tenga hijo del marido de otra?, pregunto entonces, es adulterino, y, si es soltera, será natural o incestuoso.

Entonces, pues, no es lo mismo el caso de que un sacerdote, tenga de una mujer un hijo, o una monja, encerrada en el convento, conciba un hijo.

La situación es enteramente diversa. Y en nombre de un hijo, que no sabemos si realmente será su padre un obispo o arzobispo, ¿po-

demos permitir que al sacerdote de méritos relevantes; al sacerdote constituido en alta dignidad, lo befén, como de seguro lo harían, multitud de traviesos, por el placer de perseguir a los sacerdotes católicos?

Yo, señor, soy liberal; he dado testimonio de ello todos los años de mi vida; pero, yo no soy enemigo de los frailes, sean católicos judíos o protestantes. Siendo liberal, no soy enemigo de nadie; tolero las opiniones, porque quiero que todo el mundo tolere las mías.

**Sr. Presidente.** — Se va a votar si se aprueba el artículo de la Comisión.

—Se vota y dice el:

**Sr. Secretario.** — Negativa.

**Sr. del Valle.** — Pido que se rectifique la votación.

**Sr. Presidente.** — Los que estén por la afirmativa, aceptando el artículo de la Comisión, tengan la bondad de ponerse de pie.

—Así se hace, y resulta afirmativa de 11 votos.

—Se lee, y es aprobado el:

**Artículo 121.** — La aplicación de las penas establecidas en los artículos precedentes será pedida por el ministerio público ante el juzgado competente.

**Sr. Funes.** — Hay dudas sobre la votación del artículo 120.

**Sr. Secretario.** — El secretario no había computado el voto del señor Rodríguez, porque no se paró.

—Se rectifica la votación, y resulta afirmativa de 11 votos.

**Sr. Secretario.** — Once votos contra 10: igual resultado que la anterior.

**Artículo 122.** — Deróganse todas las disposiciones del Código Civil relativas a hijos sacrílegos. Los que actualmente son llamados hijos sacrílegos tendrán la filiación que les corresponda según las disposiciones civiles que quedan vigentes.

**Sr. Paz.** — En el título «Del matrimonio» se han suprimido las disposiciones concernientes a bienes reservables.

**Sr. del Valle.** — No, señor. No sé si está suprimido en el proyecto. Estaba en el título «Del

matrimonio». Si me permite el código el señor senador...

**Sr. Paz.** — En el código está.

**Sr. del Valle.** — Eso mismo lo transcribimos nosotros.

Se ha suprimido por omisión. Debe estar donde habla de las segundas o posteriores nupcias. No sé si está en la copia; estaba en el despacho de la Comisión. Debe ser un error de copia.

Es un error de copia.

**Sr. Paz.** — Estaba suprimido en el proyecto del Poder Ejecutivo.

**Sr. del Valle.** — En los artículos 237 y 238 del código.

**Sr. Paz.** — Mi idea no era pedir el restablecimiento, sino indicarle la conveniencia de suprimir otros...

**Sr. del Valle.** — No, señor; no ha sido la intención de la Comisión suprimirlos.

**Sr. Presidente.** — Entrará como 123 el 237 del código.

—Se lee:

**Artículo 123.** — El viudo o viuda que teniendo hijos del precedente matrimonio, pase a ulteriores nupcias, está obligado a reservar a los hijos del primer matrimonio, o a sus descendientes legítimos, la propiedad de los bienes que por testamento ab intestato hubiese heredado de algunos de ellos, conservando sólo durante su vida el usufructo de dichos bienes.

**Art. 124.** — Cesa la obligación de la reserva, si al morir el padre o la madre que contrajo segundo matrimonio, no existen hijos ni descendientes legítimos de ellos, aun cuando existan sus herederos.

—Se aprueban.

—En discusión el:

**Artículo 125.** — Las causas pendientes sobre divorcio o nulidad de matrimonio pasarán a los tribunales civiles en la instancia en que se encuentren.

**Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.** — Pido la palabra, para oponerme también a este artículo, pidiendo su supresión.

**Sr. del Valle.** — Este artículo es correlativo al que hemos votado, al que prescribe que los casos de nulidad de matrimonio que se produzcan...

**Sr. Presidente.** — Es el artículo 108 que dice:

**Artículo 108.** — El conocimiento y división de las causas sobre divorcio o nulidad de matri-



monio celebrado antes o después de la vigencia de esta ley, corresponde a la jurisdicción civil.

**Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.** — Pero, no es el mismo: es un artículo distinto, con distintas disposiciones.

Yo necesito cumplir con el encargo del señor presidente, de oponerme a este artículo, porque no tiene ninguna ventaja su sanción, absolutamente ninguna.

Vamos a tener, en cambio, inconvenientes no pequeños. Si hay asuntos que están en apelación, pasarán a la Cámara de lo Civil respectiva, y va a resultar que la Cámara va a conocer en segunda instancia de un asunto fallado en primera instancia por una curia.

**Sr. del Valle.** — ¿Y en los recursos de fuerza, no fallan los tribunales civiles en causas falladas en la curia?

**Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.** — ¿Falladas?

**Sr. del Valle.** — Al menos, discutidas.

**Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.** — No falladas.

Tendría el inconveniente de venir a aplicar los jueces de lo civil, legislación que no es civil, legislación canónica. ¿Y en cambio de qué ventaja?

No creo que se obtenga alguna, sino ir a recargar a los tribunales civiles de mayor trabajo.

Hay un antecedente legislativo que debo recordar.

Cuando se estableció la justicia federal en la República Argentina, la ley que la creó establecía que las causas de fuero federal, fuese por razón de persona o por razón de la materia, se feneciese en los tribunales de provincias, si allí se encontraban pendientes, respetando, porque no hay ningún interés en alterarla, esta jurisdicción ya ejercitada; hasta cierto punto es un derecho adquirido por los jueces, cuya jurisdicción se ha provocado, cuya jurisdicción se está ejercitando, y no debe sacársela de allí y llevarla a tribunales de otro orden.

De lo contrario, sucedería que las causas ante las curias, que en cierto modo son tribunales nacionales, pasarían a jueces provinciales, y, en su caso, a que tribunales de una provincia revisasen la sentencia dada en primer instancia por una curia, confirmándola o rechazándola.

Esta jurisdicción sacerdotal, esta jurisdicción en las causas matrimoniales, es sin duda alguna, nacional; se emplea el papel nacional; su clero es costado por la Nación, pagado

por ella. Tendría esto todos los inconvenientes y yo no veo ninguna ventaja, absolutamente ninguna. Más: creo que esta ley va a entrar a regir seis meses después de su promulgación, cuando casi todas las causas pendientes se habrán concluido.

Es verdad que puede reproducirse alguna; pero, como dije, ni veo interés público, ni interés social en la disposición de este artículo. Pido que se suprima.

**Sr. del Valle.** — La Comisión tiene que insistir en este artículo, porque le sobra razón; no digo que tiene, le sobra.

No necesito repetir lo que ya he dicho sobre el carácter peculiar de la jurisdicción, sobre su carácter de orden público, respecto del cual no hay derechos adquiridos; pero tomo la cuestión en el terreno que la coloca el señor ministro.

Creo que no tiene este asunto la importancia trascendente de algunos de los otros que hemos discutido. Pero el señor ministro piensa que no hay inconveniente alguno en que las causas pendientes «y las causas que se produzcan desde ahora hasta dentro de seis meses», sean materia de la competencia de los tribunales eclesiásticos, es decir, las causas sobre nulidad y validez del matrimonio. Tiene importancia y grave.

Con arreglo a la ley que estamos discutiendo, hay también impedimentos dirimentes, o que producen la nulidad del matrimonio de acuerdo con la legislación canónica y actual de la República. Por consiguiente, puede suceder que, estando ya promulgada esta ley y estando ya en vigencia, la Iglesia, que tiene que juzgar con arreglo a sus leyes, declare nulo el matrimonio que para la ley civil es válido.

Esta es la importancia que para el caso tiene el principio que estamos discutiendo.

¿Cómo vamos a declarar nosotros que todos los matrimonios celebrados en estas condiciones son válidos, se hayan celebrado antes o después de esta ley, como lo dice el artículo, siempre que reunan las condiciones de la ley. Lo dice el artículo antes recordado por el señor presidente. Y ahora, ¿cómo declarar que la curia eclesiástica puede venir a ejercitar su jurisdicción, de tal manera que haga negatorias las disposiciones de la ley, ni cómo pretender tampoco que la Iglesia falle estas cuestiones de otra manera que con arreglo a sus leyes?

Cualquiera de las dos cosas sería igualmente irregular.

Podría hacerse una observación, que ha hecho de paso el señor ministro, observación de detalle, decir: la sentencia de un tribunal «que

es hasta cierto punto nacional», vendría a quedar sujeta a la revisión de un juez de carácter puramente provincial.

Ese «hasta cierto punto» del señor ministro de culto revela a la Cámara la calidad de los tribunales que, por deficiencia de organización del país, han gobernado estas graves cuestiones de matrimonio.

Esos tribunales eclesiásticos son nacionales «hasta cierto punto» y provinciales «hasta cierto punto».

Son tribunales híbridos, son tribunales que están fuera de la Constitución, son tribunales que no están amparados por ley alguna de la República, y es esta la jurisdicción excepcional que el señor ministro quiere mantener, con perjuicio de la misma ley y con perjuicio de lo que las conveniencias aconsejan: establece la jurisdicción normal para todos los casos, estén pendientes o no lo estén.

Cuando se cambia la jurisdicción, las causas pendientes van a los jueces que se establecen por la nueva ley, a no ser que razones de conveniencias inmediatas obliguen a aconsejar a salir de estos principios excepcionales como son aquellos a que se refería el señor ministro de culto, en el caso en que se dictó la ley federal.

Por estas razones y sin darle a este artículo más importancia que la que en sí mismo tiene, la Comisión cree que debe mantenerse.

**Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.** — El señor senador dice que no hay ley en la República que establezca los tribunales eclesiásticos. Sin ir más lejos, sin traer disposiciones más antiguas, que son leyes civiles de la Nación, citaré el Código Civil...

**Sr. del Valle.** — Que está fuera de la Constitución en esa parte.

**Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.** — No lo creyó así el doctor Vélez, cuando lo hizo, ni el Congreso cuando lo sancionó. Lo piensa sólo el señor senador y me parece que hay bastante diferencia entre la autoridad del Congreso, la del doctor Vélez Sársfield y la del señor senador.

**Sr. del Valle.** — Por esa misma razón el señor ministro no debió haber propuesto la reforma del Código Civil, porque hay tanta diferencia entre el Congreso, el señor doctor Vélez Sársfield y el señor ministro, como la que hay entre el Congreso, el señor ministro y el senador que habla; por lo menos tanta.

**Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.** — No está, pues, esto fuera de la cuestión.

**Sr. del Valle.** — Eso no lo ha probado.

**Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.** — Lo estoy probando.

El señor senador dice que no hay ley; le he citado el código...

**Sr. del Valle.** — Quizás fui demasiado lejos cuando dije que el código en esa parte estaba fuera de la Constitución.

Sí, señor; hay un artículo del código que dice que «los tribunales eclesiásticos continuarán conociendo», etcétera. No es crear tribunales, no es establecer su jurisdicción; cosas que están regidas exclusivamente por un decreto del Poder Ejecutivo.

**Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.** — Tenemos, entonces, que hay una ley nacional que establece estos tribunales y les reconoce jurisdicción en estos asuntos eclesiásticos; pero, el señor senador piensa que, porque se cambie la persona del juez, se ha de cambiar el carácter de la sentencia; que si es el vicario el que falle el pleito ha de atender a tales impedimentos, pero si es un juez en lo civil ha de atender a tales otros.

**Sr. del Valle.** — ¡Cómo no!

**Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.** — El juez tiene que aplicar la ley.

**Sr. del Valle.** — ¿Esta ley o la ley canónica?

**Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.** — La ley que rija el caso.

**Sr. del Valle.** — El juez eclesiástico que la vaya a aplicar, no aplicará más que la ley canónica.

**Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.** — Las leyes canónicas están incorporadas a nuestra legislación civil; la del Concilio de Trento, por ley de Felipe II, que le dió el exequátur y mandó promulgar en sus Estados.

**Sr. del Valle.** — Año 1564.

**Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.** — Y posteriormente estas leyes canónicas son leyes civiles para la República.

Entonces, démosles un nombre: son leyes civiles.

**Sr. del Valle.** — Para entendernos...

**Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.** — Entonces, ¿qué ley va a aplicar el juez? Las leyes civiles.

**Sr. del Valle.** — ¿Cuáles?

**Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.** — Las aplicables al caso.

¿Cuál de ellas? Ya vamos a llegar a ese punto.

Por una ley canónica es nulo el casamiento hecho entre dos primos hermanos, católicos, sin licencia del prelado, y según la ley civil es

nulo también ese matrimonio; y esta es una ley de fondo.

Entonces quiere el señor senador que, porque se cambia el juez, este matrimonio ya es válido.

¿Aplicando qué? Una de ley de fondo con efectos monstruosamente retroactivos.

No quiero agregar más, señor presidente.

**Sr. del Valle.** — Quiere decir que el señor ministro se olvida de las disposiciones de esta ley que hemos sancionado.

Hay un artículo que dice esto mismo que está refutando el señor ministro; lo dice el artículo 109: «Cuando se tratase de un matrimonio celebrado con anterioridad a esta ley y la acción de nulidad se fundare en un impedimento, se aplicarán las disposiciones de esta ley...»

**Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.** — Ese artículo lo he combatido.

**Sr. del Valle.** — Eso ha sido aceptado por la Cámara...

**Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.** — Pero no es ley. Yo he combatido aquel artículo, y entonces no hay falta de lógica en mi proceder, al oponerme a este otro.

**Sr. del Valle.** — Si el señor ministro pudiera combatir este proyecto, lo modificaría de tal manera que no reconocería su propio hijo.

**Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.** — No he oído, no entiendo. A mis hijos los conozco, señor senador; y cuando se trata de leyes, las conozco muy bien; tal vez mejor que el señor senador.

**Sr. del Valle.** — Yo no tengo: así, no es extraño. Hablaba de hijos en el sentido figurado, refiriéndome a leyes.

**Sr. Presidente.** — Se va a votar el artículo en la forma propuesta por la Comisión.

—Se vota, y resulta afirmativa de 11 votos contra 10.

**Artículo 124.** — Esta ley comenzará a regir el 1º de Enero de 1889.

**Sr. del Valle.** — En este artículo hay que modificar la fecha, poniendo el «1º de Abril», para dar tiempo a que se tramite e imprima la ley.

—Se aprueba el artículo con la modificación propuesta, así como el siguiente:

**Artículo 125.** — En la primera edición oficial que se haga del Código Civil, se incorporará esta ley en lugar del Título Primero, Sección Segunda, Libro I, arreglando la numeración que corresponda a los artículos.

**Sr. Zapata.** — Pido la palabra.

**Sr. Derqui.** — En nuestro proyecto figuraba un artículo, que hay que incluir en este, autorizando al Poder Ejecutivo para hacer los gastos que demande la ejecución de esta ley.

**Sr. Presidente.** — Es de forma: se agregará por Secretaría.

—Así queda acordado, sancionándose también el último:

**Artículo 126.** — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

**Sr. Zapata.** — Pido a la Cámara que adopte la siguiente resolución: ceder este local a la Honorable Cámara de Diputados...

**Sr. Presidente.** — Está cedido por una resolución de la Cámara, después de terminada la discusión del proyecto sobre matrimonio civil.

Mañana el Senado se reunirá en el salón de lectura.

—En seguida se levanta la sesión, siendo las 6 p. m.